

**UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO**

TESINA QUE PRESENTAN PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA

LOS ALUMNOS: GARCIA RIOS MARCOS RICARDO
LOPEZ VILLA ARNALDO
MENDOZA BARRIOS MONICA

QUE LLEVA POR TITULO:

SEGURIDAD PUBLICA Y PARTICIPACION VECINAL.
ESTUDIO DE CASO EN LA COLONIA HOGAR Y SEGURIDAD
Y LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC.

ASESORA:
CRISTINA SANCHEZ MEJORADA

MAYO DE 1996

AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar y por encima de cualquier otra cosa deseo dedicar esta tesina a mis padre: José Marcos García Chino y Manuela Ríos Hernández, ya que sin su apoyo moral y económico a lo largo de toda mi formación estudiantil, no podría haber llegado hasta el final de esta Licenciatura. Además a toda mi familia, parte fundamental en mi vida por siempre, debido a que siempre tuve ese apoyo incondicional.

A todos los profesores que me guiaron a lo largo de la carrera siendo sus enseñanzas algo más que una simple clase.

Agradezco a los siguientes profesores por sus acertados consejos y recomendaciones al momento de elaborar esta tesina:

Profra. Cristina Sánchez Mejorada

Profra. Maria Teresa Esquivel Hernández

Profra. Ana María Durán

Hago una mención especial a los siguientes profesores que considero que fueron de gran importancia a lo largo de la carrera.

Profesores: Laura Moya, Felicity Williams, Lilia Pérez Franco, Cristina Larios Malo y Ricardo Torres Jiménez.

Por último, agradeceré por siempre a la institución que dió rumbo a mis sueños, La Universidad Autonoma Metropolitana.

RICARDO

A mis padres

ARNALDO

*A mi padre, cimienta de lo que hoy soy.
A mis hermanos, para que siempre tengan éxito.*

Daniel, gracias por todos los momentos felices.

MONICA

INDICE

INTRODUCCION	1
---------------------------	----------

CAPITULO 1

RECuento HISTORICO DE LA SEGURIDAD PUBLICA

1.1	Definición de la Seguridad Pública.....	9
1.2	Antecedentes de la Seguridad Pública	14
1.3	La Seguridad Pública en el estado moderno	16
1.4	La Seguridad Pública en la Ciudad de México en los siglos XVIII y XIX.....	19
1.5	La Seguridad Pública en México en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988	25
1.5.1	Renovación Moral.....	28
1.5.2	Planes y programas en materia de Seguridad Pública	30
1.5.3	Reformas a la Administración y procuración de justicia	33

CAPITULO 2

LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LOS PRIMEROS MESES DE GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON

2.1	Planes y Programas de Seguridad Pública en la creación de los Comités Delegacionales de Seguridad Pública	37
2.2	La Seguridad Pública y los Derechos Humanos.....	47
2.3	La Comisión de la Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la Ley de Seguridad Pública	52
2.4	Estrategias y acciones en Materia de Seguridad Pública en el Gobierno de Ernesto Zedillo, hasta mayo de 1995.....	58

CAPITULO 3

SEGURIDAD PUBLICA EN AZCAPOTZALCO

3.1	Ubicación y Diagnóstico del Problema.....	63
3.2	Formas de Organización para la procuración de Seguridad Pública en Azcapotzalco.....	69

CAPITULO 4

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS.

4.1	Definición de los diversos tipos de participación.....	76
4.2	La participación ciudadana como forma de democratizar al estado.....	79
4.3	La participación ciudadana en México a partir de la década de los ochentas.....	83

CONCLUSIONES.....	93
--------------------------	-----------

ANEXO METODOLOGICO	99
---------------------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA.....	116
--------------------------	------------

INTRODUCCION

Sabemos que estudiar un tema como el de la Seguridad Pública no es una tarea sencilla, pues a pesar de ser de gran actualidad se encuentra poco estudiado, pero no por ello deja de ser relevante. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tema puede estudiarse desde muchos aspectos, tales como cuestiones políticas, actos de gobierno, administración e impartición de justicia, prestación de servicios, así como aquellos que tienen que ver con la tranquilidad y seguridad de los individuos y de sus bienes, es pues que se hace necesario de nuestra parte, delimitar y conceptualizar dicho tema para saber qué matiz tendrá nuestro trabajo.

A nivel general se puede decir que la seguridad pública implica la certeza de que la tranquilidad que gozan los individuos en una sociedad no se ve soslayada por actos que afecten su patrimonio o su persona. Visto de esta forma, nuestro análisis sobre seguridad pública estará relacionado más que nada con aquellos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de los individuos, es decir, los problemas que los afectan directamente, como asaltos, robos a automóviles, robos de autopartes, robos a casa habitación, etcétera. En base a esto trataremos de analizar cuál es la actitud de los individuos ante los actos que afectan su patrimonio o persona, es decir, las muestras de inseguridad en su zona de residencia.

Cabe mencionar que este tema (Seguridad Pública) se puso en boga a partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) dentro del marco de una severa crisis económica que trajo como consecuencia una ola de delincuencia que abatió al país, producto del desempleo y de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Ante el reclamo ciudadano, el Estado implementó programas de seguridad pública para tratar de frenar la situación de inseguridad que prevalecía, éstos estuvieron contenidos dentro del marco que dictaba el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, es importante mencionar que estos programas no terminaron en ese sexenio, ya que fueron continuados durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) principalmente en el Distrito Federal vía la creación de los Comités Delegacionales de Seguridad

Pública propuestos por el entonces regente Manuel Camacho Solís. Tales acuerdos fueron publicados en Enero de 1989 y mediante ellos se reflejaba la importancia que tiene la participación ciudadana para la impartición de seguridad.

Posteriormente, como otra medida para reforzar las políticas de seguridad pública, fue creada la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en Diciembre de 1993. Su principal objetivo estaba contenido en el artículo primero, que menciona que "La presente ley es de orden público e interés general y tiene como objetivo conocer las bases para la prestación del servicio de seguridad pública, así como regular los servicios privados de seguridad en el Distrito Federal." (Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal)

Aunado a esto, es también notable el hecho de que el tema sobre seguridad pública sigue estando presente aún dentro del discurso de toma de posesión del nuevo presidente de México, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León quien afirma que "...en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, hemos vivido un creciente clima de zozobra e inseguridad. Hemos sufrido grandes crímenes públicos que no han sido del todo esclarecidos; hemos padecido violencia cotidiana y un deficiente desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia...son intolerables los asaltos a hogares y centros de reunión, el homicidio de hombres y mujeres que defienden su patrimonio, los secuestros que han proliferado en todo el país..."(Discurso de Toma de Posesión, México 1º de Diciembre de 1994)

Visto lo anterior, es importante para nosotros la revisión de todo lo que se instrumentó en esta materia durante los años que van de 1982 a 1994, y desde luego lo que se dé al respecto conforme vaya avanzando este nuevo sexenio. Todo esto con el propósito de que la información que se obtenga sirva como base de nuestro análisis. También será necesario recurrir a las estadísticas para que nos ayuden a tener una visión más amplia del problema, por ejemplo, podemos decir que en la Delegación Azcapotzalco se dieron de Enero a Abril de 1994, 310 delitos, que corresponden al 6.5% del total de las delegaciones, ocupando por ello el séptimo lugar en índices delictivos a nivel del Distrito Federal, sin embargo, no por ello deja de ser importante esta problemática. Cabe mencionar que la Delegación Cuauhtémoc ocupa el primer

lugar con 941 delitos correspondientes al 20% del total. (EL FINANCIERO, 28 de mayo de 1994).

Otra cuestión que nos ayudará a entender mejor el problema serán las encuestas, tales como la publicada por el periódico REFORMA ("Los vecinos opinan" REFORMA 21 de Noviembre de 1994) que afirma que el 30% de los encuestados mencionan como principal problema de su colonia la delincuencia, mientras que el 21% asegura que es la falta de vigilancia, con ello se observa una marcado clima de inseguridad.

Ahora bien, es importante hacer notar que mediante una investigación realizada por nuestra parte, consistente en la visita a la Delegación y a la H. Junta de Vecinos de Azcapotzalco, pudimos constatar que ésta Delegación no ha implementado un Plan de Seguridad Pública, a diferencia de otras Delegaciones que sí lo han hecho, como por ejemplo la Delegación Benito Juárez y la Delegación Milpa Alta.

Una vez visto lo anterior conviene explicar lo siguiente, si bien es cierto que la elección de nuestro tema parte de una preocupación conjunta en torno a los acontecimientos generados en los últimos meses en materia de seguridad, tanto a nivel de lo público como de lo político, el hecho que más llama nuestra atención y al cual nos abocaremos más, se encuentra inserto en un nivel que bien podemos definir como de lo cotidiano. Para ello se han elegido dos lugares correspondientes a la Delegación Azcapotzalco, éstos son la colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac, ambas diferenciadas por el espacio físico que ocupan, pero que igualmente tienen que ver con el aspecto de la seguridad. Ambos lugares - como ya se dijo - ocupan un diferente espacio físico, sin embargo, y gracias a la cercanía que existe entre ambos lugares, bien vale la pena estudiar cual es el grado de inseguridad en uno y en otro lugar, y cómo actúan los vecinos para poder autoprotgerse ante la ausencia de un plan de Seguridad Pública implementado por las autoridades encargadas de su seguridad como ya se mencionó. Así podemos comparar ambos casos y lograr algunas conclusiones que nos permitan aportar algún tipo de información, para tal efecto se realizó una encuesta en ambas zonas para conocer la opinion de estos lugares respecto a la inseguridad. (Vease anexo metodologico)

Cabe mencionar que el motivo principal que nos impulsó a realizar la investigación sobre seguridad pública en estas zonas es que, en la colonia Hogar y Seguridad se pretende implementar un sistema de seguridad basado en alarmas, las cuales, según la presidenta de colonia, Josefina César, deben ser adquiridas por los propios vecinos, pues ellos han tenido que actuar por su cuenta ante los numerosos robos a casa habitación de que son víctimas y ante los cuales las autoridades de la Delegación Azcapotzalco han mostrado una actitud negligente. A pesar de estar inconformes con las autoridades y de querer una mayor seguridad, no todos los vecinos están de acuerdo con la adquisición de las alarmas pues afirman que el servicio de la seguridad le compete al gobierno, pues es precisamente para éste y otros servicios para lo que pagan altos impuestos.

Ahora bien, la intención de analizar cuestiones sobre seguridad en la Unidad Habitacional Cuitláhuac es que además de la diferencia socioeconómica existente por tratarse de edificios multifamiliares y no de una zona residencial con casas unifamiliares, hay una diferencia de ocupación del espacio físico referente al que ocupa la colonia anteriormente mencionada a pesar de estar separada de ella por sólo la Avenida Cuitláhuac, además de que la inseguridad en tal zona se da de otra manera; a decir de un vecino de la Unidad Habitacional, ésta se da principalmente por los robos a automóviles, a autopartes y robos menores a transeúntes. Las actividades de los vecinos que a simple vista pudieron observarse ante la inseguridad son diferentes a las que se presentan en la colonia vecina, consideramos que para ello tiene que ver la diferencia del entorno que ocupan, estas actitudes refieren sobre todo a las medidas que toman los habitantes - sobre todo los de la planta baja de los edificios - de colocar rejas en sus ventanas, sin embargo, para evitar el robo de autopartes no pudieron observarse medidas para combatirlos.

Sin embargo existen otras razones para realizar un estudio sobre esta zona, dentro de las cuales destacan las siguientes: la viabilidad para la obtención de datos a través de los profesores, vía consultas, charlas y asesorías o simplemente mediante el préstamo de información bibliográfica y estadística, también la facilidad para tener recomendaciones con las personas adecuadas que nos pudiesen auxiliar en el momento en que nos surgiera algún contratiempo durante el transcurso de la investigación.

Una vez revisado lo anterior, lo que a nosotros nos interesa abordar básicamente es lo siguiente:

OBJETIVOS GENERALES:

1. Conocer la respuesta que ha dado el Estado ante el aumento de los índices delictivos y el impacto que éste ha tenido en las zonas mencionadas.
2. Analizar cuáles han sido las formas de organización vecinal ante el problema de la inseguridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer si los programas de seguridad pública implementados por el Estado han sido eficientes.
2. Conocer las formas de organización vecinal para dotarse de un sistema satisfactorio de seguridad.
3. Conocer cómo una colonia y una Unidad Habitacional son afectadas por el problema de la inseguridad dependiendo del espacio físico que ocupan.
4. Conocer si la falta de un programa de Seguridad Pública en la Delegación Azcapotzalco ha propiciado la participación directa de los vecinos en los lugares a estudiar.

5. Conocer la forma de organización que tienen los vecinos de los lugares a estudiar para dotarse de una mayor seguridad dependiendo del tipo de delitos que los aquejan.

HIPÓTESIS:

1. La ineficiencia de los programas de Seguridad Pública implementados por el Estado ha propiciado la inconformidad de la ciudadanía y a que esta busque mecanismos y formas de seguridad que le permitan autoprotegerse.

2. Los mecanismos que la población adopta para defenderse de los delincuentes depende del tipo de asentamiento en que se encuentra y del tipo de delitos que se presentan con mas frecuencia.

Para alcanzar los objetivos mencionados y llegar a la corroboración o no de nuestras hipótesis, este trabajo se ordenará como a continuación se explica.

En el primer capítulo de esta tesina aborda el tema de la seguridad pública, dando su definición y algunos antecedentes desde su surgimiento del Estado moderno y cómo este ha evolucionado hasta llegar a ser un problema constante en la ciudad de México en los siglos XVIII y XIX. También se analiza dicho tema a partir de la década de los ochenta bajo el régimen de Miguel de la Madrid, siendo en este sexenio donde se inicia la elaboración de planes y programas para combatir la inseguridad.

El segundo capítulo tiene que ver con la seguridad pública en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y los primeros meses de Ernesto Zedillo. En este se analizan sobre todo los planes y programas que tuvieron que ver con esta problemática y las diversas medidas para combatir los hechos delictivos que se presentaban, además de que se menciona la evolución que tuvo la participación ciudadana a través de la Junta de Vecinos. Igualmente se presentan las estrategias y acciones en esta materia en los primeros meses de gobierno de Ernesto Zedillo, las cuales estuvieron contempladas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000.

El tercer capítulo plantea cómo se da la participación en la delegación Azcapotzalco, la cual fue nuestro ámbito de referencia para llevar a cabo la investigación de campo. Específicamente en la Unidad Habitacional Cuitláhuac y la Colonia Hogar y Seguridad. En dicho capítulo se dan a conocer los datos de nuestra encuesta al tiempo de que se hace hincapié en la forma como la delegación ha actuado para combatir el problema y lograr disminuir la delincuencia principalmente en nuestras zonas de estudio.

El cuarto capítulo está referido a las formas de participación ciudadana que se hacen presentes después del marcado problema de la inseguridad, es decir a partir de que el problema se agravó en la década de los ochenta. Se muestran aquí las definiciones de los diferentes tipos de participación, también se habla sobre cómo la participación ciudadana es utilizada como forma de democratizar al Estado.

Por ultimo se habla sobre las conclusiones a las que llegamos después de haber realizado esta investigación tomando como referencia nuestras hipótesis planteadas en el principio de este trabajo.

CAPITULO 1

RECUESTO HISTORICO DE LA SEGURIDAD PUBLICA

Trataremos en este capítulo acerca de la definición del concepto de seguridad pública al igual que hablaremos sobre cómo se ha ido presentando esta cuestión a lo largo de la historia, tanto en el Estado Moderno como en México en siglos pasados hasta llegar a la década de los ochenta.

1.1

DEFINICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Nuestro trabajo está referido a una parte de la *sociedad* entendida ésta según Weber como “una relacion social cuando y en la medida en que la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales de fines o de valores, o también en una unión de intereses con igual motivación”(Weber, Max. 1983: 33). Con esto damos a entender que la sociedad va mas allá de una reunión permanente de personas que conviven bajo leyes comunes.

El problema o situación a tratar en nuestro trabajo de investigación tiene que ver con la Seguridad Pública. De ésta se puede decir que tiene que ver con la calidad de lo seguro, pero que involucra en su conjunto a la sociedad, de ahí que mencionemos que la seguridad es del dominio público.

La inseguridad pública como contraparte de la seguridad, se considera como un *problema social* ya que “èste implica un conflicto de valores en el seno de una cultura, sea por discrepancia entre los tipos aceptados de comportamiento social y el comportamiento real.”(Dicc. Encicl. Larousse. 1990: 2569)

Al hablar de un comportamiento conflictivo relacionado con la seguridad pública en donde se dan diversos delitos, es que se han llevado a

cabo diversas *medidas* conceptualizadas como “algo disciplinario dirigidas a asegurar mediante la aplicación de normas el orden o el respeto a los reglamentos.”(Ibid. :2051)

Dichas medidas han sido plasmadas en *planes y programas* entendidos los primeros como “documentos con un conjunto de perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para realizar la intervención generalmente estatal; también se le describe como el resultado de un proceso de planificación.”(Ortega, Blake, J. Arturo. 1982: 245), El segundo se refiere a “un instrumento para conocer con precisión la coherencia de las proposiciones y comportamientos para un conjunto específico de actividades de los distintos agentes públicos entre sí y las de éstos con los agentes privados. En síntesis se puede decir que un programa se refiere a una serie de actividades y proyectos que pretenden realizarse para cumplir con los propósitos de un plan.”(Ibid. :284)

De acuerdo a la investigación que realizamos, daremos cuenta de los planes y programas que ha implementado el *Estado*, el cual es conceptualizado como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (Weber, Max, 1983: 1056)

Los conceptos mencionados anteriormente son un reflejo de lo que es el Estado moderno, ya que una de sus finalidades es garantizar el bienestar y la seguridad de las personas, quedando facultado él mismo para intervenir en asuntos que la gente considere que van en perjuicio o en provecho del interés general, así como hacer uso legítimo de la fuerza física conforme a derecho según se necesite, tal y como se emplea al momento de impartir seguridad y procurar justicia

Teniendo en cuenta el problema de la seguridad pública, el cual involucra a la sociedad en su conjunto, el nuevo Estado Mexicano (Neoliberal de 1982 a la fecha) ha traído como consecuencia una cada vez mayor *participación ciudadana*, entendiendo por ello “un cierto poder de intervención de los miembros de una sociedad o de algunos de ellos en las decisiones o acciones que afectan la gestión ordinaria de la sociedad.”(Gran Encicl. Larousse, 1990)

Con esto queremos decir que la participación ciudadana es un elemento nuevo dentro de la cultura de la seguridad la cual desarrollaremos dentro de nuestro trabajo a través de un estudio de caso.

Dicha participación no se ha dado de manera desordenada, ya que ha seguido cauces institucionales a través de la organización de los vecinos en juntas vecinales y comités delegacionales de ciudadanos. Sin embargo la organización también se ha dado de manera independiente al no encontrar respuestas rápidas y eficientes cuando no es atendida su demanda por quienes se ocupan de dar solución a dicha problemática. Este tipo de organización ha sido conceptualizada como *participación vecinal* ya que “involucra a una población o barrio” (Gran Encicl. Larousse, 1988), tal y como lo manejamos en nuestro estudio de caso.

Debido a que el principal interés de nuestra tesina es analizar el problema de la seguridad pública, hemos consultado diversos autores que hablan del tema. Tomando en cuenta que - como decíamos anteriormente - el término de Seguridad Pública no presenta una definición única, será de vital importancia revisar las aportaciones que a este respecto hacen algunos especialistas en la materia, buscando con ello tener una visión más amplia de dicho problema y tratando finalmente de elaborar un concepto propio.

Empezaremos diciendo que de acuerdo con el *Diccionario de la Real Academia* la seguridad se define como la calidad de lo seguro, mientras que seguro se define como libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo.

Por otra parte, Ramón Sosamontes Herreramoro, Diputado del Partido de la Revolución Democrática afirma que el concepto de Seguridad Pública “va más allá de la seguridad para los actos de gobierno, tiene que ver con los bienes y los derechos de los que habitan nuestro país y comprende tanto los derechos humanos como la administración e impartición de justicia; así como la prestación de servicios, abarca aspectos complejos que se encuadran dentro del esquema general de un Estado de Derecho.”(Sosamontes, R., 1993: 79)

Para la Diputada del Partido Acción Nacional, Carmen Segura Rangel “la seguridad pública es el servicio que presta el Estado consistente en un conjunto de mecanismos y acciones tendientes a equilibrar el orden social y la

libertad individual para el mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad de la misma sociedad.”(Sánchez-Mejorada, C., 1995: 1)

Para Samuel González Ruiz, autor del libro *Seguridad Pública en México* (1994), la Seguridad Pública se relaciona con el mantenimiento de la paz social y el orden públicos. A su vez, la seguridad es definida como “la protección que se genera a través de los mecanismos del control penal y del mantenimiento de la paz pública mediante acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de las formas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivos.

Una vez revisadas estas definiciones podemos decir que para nosotros la seguridad pública implica la certeza de que la tranquilidad de que gozan los individuos en una sociedad no se vea soslayada por actos que afecten su patrimonio o persona.

De acuerdo con lo anteriormente escrito hemos podido detectar que existe una coincidencia en las definiciones dadas debido a que la idea general que se tiene es la de que el Estado es quien debe proporcionar la seguridad pública sin ningún tipo de distinción y considerándose ésta como un servicio a la sociedad. Sin embargo, en los últimos años dicha seguridad se ha visto rebasada por los actos de violencia que han sacudido a la sociedad, ya sea a través de personajes públicos o individuos en general. Tomando en cuenta a Ramón Sosamontes afirma que “no se ha cambiado la concepción fundamental que los regímenes han venido aplicando como seguridad pública, y es que la seguridad pública se ha aplicado en defensa del estado y del gobierno y no de la sociedad” (Sosamontes, R., 1993: 76)

En términos formales el Estado ha procurado aplicar la seguridad a dos niveles, por un lado, para el mantenimiento de sus instituciones, y por el otro para el mantenimiento de la paz pública en la sociedad, ya que es ésta la que se encarga de darle legitimidad, lo que viene a redundar en un fortalecimiento del Estado.

No obstante, el hecho de que el Estado se haya preocupado por llevar a cabo una política de seguridad dirigida a la actualización de normas y leyes, esto no garantiza la seguridad pública debido a que existe mayor violencia

provocada por una crisis económica, y debido también a la lentitud, el burocratismo y la corrupción dentro de la administración de justicia.

1.2

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD PUBLICA

A pesar de que el tema de la seguridad pública ha alcanzado relevancia en tiempos recientes, tiene sus antecedentes desde la época medieval, dándose en mayor medida como rubro de actuación en el Estado moderno.

Durante la época medieval y hasta el siglo XVI las relaciones entre los soberanos y sus súbditos estaban regidas por pactos que establecían deberes comunes, entre los que se encontraban la libertad habitual, la inviolabilidad del domicilio y la protección contra detenciones arbitrarias. Había una tradición medieval de limitaciones al soberano y obediencias condicionadas ya que existían cortes parlamentarias, Estados generales o Asambleas donde existía una negociación entre el príncipe y el pueblo, dando esto pauta al surgimiento de un pensamiento contractualista representado posteriormente por Hobbes, Rousseau, Locke y Kant.

Debido al ambiente conflictivo de guerras continuas entre diversos reinos, aparece el problema de la paz entendida como seguridad en un territorio, por ejemplo, las cortes de Valladolid, de 1440, se dirigen al rey para solicitarle que aminore los desacuerdos internos. Cabe mencionar que debido a estas cortes, España se perfila como el iniciador del régimen del estado moderno en cuanto a garantizar la paz social. Se observa entonces que ya existe la preocupación por la seguridad de las personas y la circulación de las mercancías como elementos de los pactos políticos medievales, los cuales darán origen a la monopolización de la seguridad como parte integrante del estado moderno.

Ya durante el absolutismo (siglos XVI Y XVII) el Estado viene a garantizar el bienestar y la seguridad a través de la generación de instituciones o aparatos burocráticos que regirán la vida de los súbditos aún sin el consentimiento de éstos. Aunque la finalidad del Estado era garantizar el bienestar y la seguridad, se dejaba a criterio del gobernante del estado definir qué era el mayor bienestar y qué era el interés general.

En esta época la policía no era entendida como en la actualidad, es decir como elementos al servicio de la ciudadanía, sino como parte integrante de la administración pública, ya que realizaban tareas como vigilar la calidad de los alimentos, precios, construcciones, etcétera, además del control de todo tipo de publicaciones y sus respectivos contenidos, así como la vida íntima y social de los escritores, teniendo como objetivo, evitar la publicación de todo aquello que atentara contra su reino.

Por lo que respecta al pensamiento ilustrado del siglo XVIII, podemos decir, siguiendo a Césare Beccaria, que “las leyes son las condiciones con que los hombres independientes y aislados, se unieron en sociedad, fatigados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla, sacrificaron una parte de ella para gozar la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una nación. (Beccaria, Césare. *De los delitos y las penas* CNDH, 1991)

Hasta este momento la seguridad estaba entendida como la tranquilidad interior y exterior de un estado, sin embargo ya también comienza a involucrarse la seguridad en el sentido de la protección de los bienes y personas, de ahí podemos citar el pensamiento del clérigo catalán Dou y Bassols, quien en su obra *Las instituciones* (1775) afirma que “la seguridad pública comprende la protección y defensa en cuanto sea posible y con medidas preventivas del sosiego, la vida, la salud, los bienes y la comodidad de los particulares dentro y fuera de las poblaciones.”

Dentro de esta misma etapa surgen otras formas de pensamiento plasmadas en la Revolución Francesa donde se establece que la policía debía cuidar el orden público, la libertad y la seguridad individual, siendo su característica principal la vigilancia y la sociedad como objeto.

1.3

LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO MODERNO

El nacimiento del Estado moderno está enmarcado dentro de una serie de acontecimientos que se presentaron durante el siglo XVIII, tales como, la declaración de independencia de Estados Unidos en 1776, y la Revolución Francesa de 1789. Estos movimientos de corte liberal restringen los límites de la autoridad gubernamental ya que su deber era la protección de la libertad y la propiedad de los individuos; posteriormente y después de la Revolución Francesa se origina la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, entre los que destaca en artículo 3º, que consideraba que toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son, libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, igualdad y especialmente en el artículo 12 menciona que la garantía de los derechos del hombre y el ciudadano necesitan una fuerza pública instituida para el beneficio de todos y no de los particulares a quienes les es confiada.

Con base en lo anterior surge la Declaración Francesa de 1793, que en cuestión de seguridad menciona que ésta consiste en la protección dada por la sociedad a sus miembros para la conservación de su persona, derecho y propiedades. Por lo tanto podemos decir que la seguridad es vista como un derecho ciudadano y como una obligación del Estado. De esta manera éste funciona como administrador y procurador de justicia.

La idea burguesa de la seguridad, radica en la no intervención económica por parte del Estado, y sí en la intervención antidelictiva.

Dentro del pensamiento liberal, la idea que se tiene de la policía llega a tener nuevas acepciones, esto debido a que como una nueva fuerza representada por la clase capitalista y con el predominio del principio del libre mercado, llevó poco a poco a la policía a ocuparse de la protección de la propiedad privada como un derecho consagrado en las ya mencionadas declaraciones políticas, además de la adopción de una fuerza pública especializada en la prevención y persecución de los transgresores de la ley.

Ahora bien, el sistema político es entendido como “aquel que intenta agrupar todos los factores formales en informales que inciden en la vida política y que implican el funcionamiento político de un país como un todo” (Heller, Claude, *El poder, la política y el estado*. 1936)

Dentro de las instituciones del sistema político se encuentran los partidos políticos, por tanto la seguridad es considerada como un subsistema. Este subsistema responde únicamente a ciertas tareas como podría ser el mantenimiento de la paz pública y tiene una función importante para el resto de los subsistemas políticos ya que se aboca al mantenimiento de la ley y la procuración de seguridad de bienes materiales.

Ya para el siglo XIX la cuestión de la seguridad pública se relaciona con el aspecto policiaco, es decir, con la lucha contra el crimen, la prepotencia y la corrupción, dando por entendido lo que significó la seguridad pública y que es del conocimiento común. Sin embargo existe otra versión que afirma que para estos tiempos la seguridad pública o política funcionó como defensora de los derechos y libertades del hombre y del ciudadano.

En la actualidad, la idea de seguridad ya no es manejada solamente como un asunto policiaco. más bien es vista como un problema social al cual se le ha dado tratamiento para modernizar al sistema político-jurídico del Estado mexicano.

Finalmente se dice que “la modernidad quiso tener una fuerza pública que siendo de los ciudadanos, protegiera la vigencia y el respeto de las libertades y derechos ante el poder y los gobernantes, en este sentido entiendo la seguridad pública moderna como la seguridad de los gobernados y no la de los gobernantes” (González Ruiz, Samuel. *Seguridad pública en México* UNAM, 1994)

Por tanto, todo lo anterior tiene que ver con el mantenimiento y vigencia de un Estado de derecho fundamentado a partir de una serie de normas y reglas que garantizan la seguridad de la ciudadanía a través de instituciones de procuración de justicia. De esta manera el Estado moderno tendrá como interés público la seguridad, sirviendo ésta a su vez para la reproducción de un Estado democrático.

En el siguiente apartado se abordarán las principales características de la seguridad pública en la Ciudad de México en el siglo XVIII y XIX con la finalidad de ir acercándonos al problema específico de México, se elaborará éste teniendo en cuenta la información ya descrita a nivel general.

1.4

LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

Nuestro interés ahora es dar a conocer algunos aspectos de cómo se proveía de seguridad a los ciudadanos en los siglos XVIII y XIX; mediante la descripción de las funciones que llevaba a cabo la policía de la ciudad.

Es necesario destacar que desde la época virreinal, según documentos girados por el Ayuntamiento de México, la policía siempre estará ligada al buen gobierno, al grado de que manifestaba como “Policía y Buen Gobierno”.(Nacif Mina, Jorge. Policía y Seguridad Pública en la Ciudad de México 1770-1848 en: Regina Hernández F. comp. 1994: 9)

Según Jorge Nacif Mina “Policía es una palabra que encuentra su origen en dos raíces griegas: *politeia*, que significa gobierno; y *polis*, que significa ciudad; así podemos definirla como: “Gobierno de la Ciudad”; en el Diccionario de Autoridades de la Lengua Española, editado en los años de 1726 a 1737, se determina que policía es: “La buena orden que se observa y guarda en las ciudades y República, cumpliendo las leyes u ordenanzas para su mejor gobierno”, así como también: “Cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y costumbres”; y: “Aseo, limpieza y pulidez”. (Ibid: 11)

Podemos decir entonces que en la época virreinal el concepto de policía se refiere a las acciones administrativas controladas por el ayuntamiento y utilizadas con fines de vigilancia del cumplimiento de los bandos públicos y órdenes en la ciudad.

Las acciones de policía de la Ciudad de México eran manejadas por el Ayuntamiento por medio de la Junta de Policía, la cual había sido formada desde el siglo XVI, a su vez dependían de ella los celadores públicos que eran los encargados de vigilar las acciones administrativas de la ciudad. Cabe señalar que la junta de policía se encargaba de instituir celadores y vigilantes que denunciaran faltas administrativas o cuando en sus manzanas asignadas hubiera hechos delictivos o criminales, cuando esto sucedía daban aviso a la

Policía de la Acordada o a las Tropas dependientes de la Real Audiencia de México encargadas entonces de imponer la sanción correspondiente

Es de señalar que desde la organización del municipio de México, en 1524, la policía y buen gobierno realizaban actividades relacionadas con la administración de la ciudad.

Entre 1770 y 1790 se presentaron los llamados defectos de policía, causados principalmente por el incumplimiento de los bandos y reglamentos administrativos que regulaban las actividades en lugares públicos, como por ejemplo, el pago de contribuciones al ayuntamiento.

El 2 de enero de 1772 se propuso por parte del Cabildo, que cinco vecinos de la ciudad, honestos y con buenas costumbres, ocuparan puestos de vigilancia en la Junta de Policía para que los informes remitidos al Ayuntamiento tuvieran la visión ciudadana; sin embargo fue hasta 1776 que esta propuesta fue aprobada por el virrey Antonio María de Bucareli

En 1786, Carlos III aplica a la Nueva España las Ordenanzas de Intendentes, donde se contempla un capítulo denominado "Causa de Policía", manifestando que los intendentes tenían la obligación de saber las costumbres de los vecinos sujetos a su gobierno para así poder castigar a los ociosos que causaran inquietudes y escándalos desfigurando el buen semblante de las repúblicas.

Haciendo un paréntesis es importante decir que estas ordenanzas tuvieron su origen en Francia y a través de su invasión cultural mediante la casa de los Borbones en España da comienzo el llamado Despotismo Ilustrado apareciendo la influencia francesa.

Los intendentes también cuidarían de que en sus pueblos no existieran vagos ni gente sin oficio, y si alguno podía maniobrar armas, sería remitido de inmediato a los regimientos del virreinato o a barcos de guerra o mercantes, si en su caso, fueran inútiles para cualquier actividad, mendigos o poco seguros, se les impondrían penas establecidas por las Leyes de Indias, haciéndolos trabajar por lo regular, en minas.

También tenían la obligación de mantener dentro de sus pueblos “limpieza, ornato, igualdad y empedrado de calles”(Ibid: 18), si algún edificio estaba dañado, su deber era obligar al dueño a repararlo. Para 1790 el virrey manifestaba que la policía estaría dispuesta a remediar muchos defectos que la ciudad tenía. Cabe señalar que los reglamentos involucraban a toda la población y se decía que la policía no era sólo para vigilar, sino para que actuara con la población para ordenar su conducta en la vía pública y haciéndolos corresponsables del cumplimiento de las normas.

En la organización de la policía capitalina, la base administrativa eran los celadores públicos, que tenían la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas, reglamentos y bandos de policía aprobados por la ciudad y aunque realizaban acciones policiacas no eran reconocidos como policías, se les llamaba celadores, vigilantes, serenos, guardafaroles y guardas públicos. Entre sus funciones no figuraba el perseguir a los delincuentes, sólo vigilaban el cumplimiento de las normas, y si había una violación al reglamento, daban aviso a la autoridad, que era el regidor correspondiente.

Cuando se trataba de crímenes, delitos graves o peligrosos, el celador daba aviso al jefe de tropa cercano y trataba de entener al delincuente mientras llegaba la fuerza armada para capturarlo.

Con los reglamentos de policía generados en 1790 y 1791 “se dió un ordenamiento en la función de los celadores referente a mantener una mínima honestidad en la vigilancia; pero el proceso no se concluyó a causa de la destitución del Conde de Revillagigedo, y los vigilantes vieron en las calles una fuente económica de provecho ante los precarios sueldos que percibían,...”(Ibid: 25) esto dió origen a una forma de corrupción, se entiende así por que la ordenanzas y reglamentos no lograban los resultados deseados por las autoridades virreinales.

Los celadores tenían ante la población una mala imagen, pues eran menospreciados por aplicar castigos que afectaban a la población, fueron el reflejo de autoridad y se aplicaban represalias contra ellos. Sin embargo otras veces eran recompensados por hacer caso omiso de alguna infracción o irregularidad.

Eran vistos como vecinos, pues formaban parte de la comunidad, que al no encontrar trabajo, ingresaban a la corporación policiaca, además estaban sujetos a la inseguridad y peligros propiciados por los vecinos cuando querían hacer cumplir los bandos de policía.

En 1811 ante el impacto del movimiento independentista, el virrey Francisco Javier Venegas, estableció el nombramiento de un superintendente de Policía y Tranquilidad Pública que no tendría remuneración, también se instituyó un diputado de policía, conformándose la organización policiaca, en 16 tenientes distribuidos en 32 cuarteles menores de la ciudad.

Durante el gobierno de Guadalupe Victoria se prosigió con las mejoras para la policía de la Ciudad de México, ésta seguía siendo entonces un sinónimo de buena administración y gobierno.

En 1825 había dos formas de vigilancia, la militar, dependiente del gobierno federal y la policía administrativa, adscrita al Ayuntamiento de México.(Ibid: 37)

Fué en 1826 cuando se decretó la formación de un cuerpo de policía federal para vigilar la ciudad, esto parece ser el antecedente más directo de lo que se conoce como Seguridad Pública, según Jorge Nacif. Este cuerpo de policía se compondría por 150 hombres a pie y 100 a caballo.

El Plan de Seguridad Pública buscaba evitar la costumbre de tratar mal, insultar y agredir a los celadores públicos a través de la instauración de castigos y multas, y mantener al mismo tiempo el buen funcionamiento de la ciudad.

También a través de este sistema de policía se estableció la utilización de la fuerza y represión como forma de mantener el orden público. Sin embargo el plan duró poco, pues para 1827 los conflictos en las calles y plazas eran notables, pues el grupo de seguridad se ocupaba más de perseguir a los criminales que a las cuestiones de administración pública.

Se observa también la instrumentación de formas de participación ciudadana dirigidas al control de la ciudad pues se afirma que entre 1827 y 1847 la llamada policía civil estaba formada por jefes de familia de las

manzanas en que se dividían los cuarteles menores. En este año se crearon los alcaldes auxiliares y ayudantes de cuartel ubicados en las manzanas, este era un cargo honorífico que no podía ser denegado sin una buena causa, tales nombramientos se hacían entre los jefes de familia y duraban un año, pudiéndose reelegir.

Sin embargo, la población no siempre estaba de acuerdo en ocupar algún puesto en la policía civil, pues afirmaban que era obligación de las autoridades y no de ellos. además de que era un trabajo excesivo y que no se les remuneraba.

A fines de 1828, el gobernador del Distrito Federal, José María Tornel y Mendivil dictó nuevas medidas de seguridad con el objeto de crear vigilantes del orden público entre los vecinos de cada manzana. Esta medida continuaba con la idea de que la población fuera la encargada de vigilar.

Sin embargo, había un desinterés por parte de los ciudadanos en participar en la policía de la ciudad; los jefes de familia elegidos no acudían al llamado de los regidores de cuartel, por ello se determinó que los vigilantes del orden público fueran designados por el regidor de cada cuartel, indicando que ningún ciudadano podía excusarse de tal servicio.

Así, cada jefe de familia encargado utilizaba una boleta donde registraba los datos de los habitantes para saber quienes ayudaban en el establecimiento del orden, para ello, el vigilante nombraría cuatro vecinos de cada calle de la manzana para que cuidaran de día y de noche.

Es importante decir que aunque la obligación de brindar seguridad correspondía al municipio, pues para ello se pagaban impuestos, la responsabilidad de ésta recaía en la ciudadanía, evitando con ello erogar gasto público.

En 1833, año en el que subió a la presidencia Antonio López de Santa Anna, el gobernador del Distrito Federal, José María Tornel solicitó apoyo para vigilar la ciudad. Del cuerpo de Seguridad Pública se dispuso de elementos denominados Policía Activa, con obligación de perseguir malhechores, desertores y vagos y auxiliar a todas las autoridades.(Ibid: 43)

En 1837, el Distrito Federal determinaba la gravedad de la criminalidad en la Ciudad de México, estableciendo que a pesar de tener tantas autoridades encargadas de vigilar y resguardar la tranquilidad pública, todos los días se cometían con imprudencia todo tipo de crímenes y casi nunca aplican las penas correspondientes.

Sin embargo, las propias autoridades expresaban que la culpa era del sistema, pues les restaba autoridad y los sujetaba a disposiciones de administración interna que nada tenían que ver con la vigilancia pública.

Como se podrá observar a lo largo de este apartado, desde la época virreinal el Estado asume el compromiso de proporcionar seguridad a la sociedad. Sin embargo ésta se daba de manera deficiente ya que no existía una corporación especializada para ello de parte del municipio de la Ciudad de México que contara con personal capacitado responsable de proporcionar seguridad.

En todo caso, lo que existía era una serie de reglamentos que obligaban a la ciudadanía a participar en tareas de seguridad a nivel de colonia o barrio con el supuesto de que la población estaba más familiarizada con los problemas que los aquejaban y por lo tanto los podrían resolver mejor. No obstante las personas que participaban en la seguridad no percibían retribución alguna por la labor desarrollada, dando como resultado una ineficiencia en dicha actividad, pues no existía un compromiso de tipo moral con la profesión policiaca. Esto hacía que el municipio no erogara recursos de su presupuesto para la seguridad a pesar de hacer suyo dicho compromiso.

Con lo mencionado anteriormente podemos entrar a describir lo que es la seguridad pública en el siglo XX y más específicamente en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, pues si bien esta problemática ha estado presente desde hace mucho tiempo, es justamente en el periodo a analizar cuando se presenta de manera alarmante, provocando con ello la atención de las autoridades y la búsqueda de medidas para tratar de dar respuesta a la ciudadanía que reclama seguridad.

LA SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 1982-1988

Como hemos mencionado anteriormente, la crisis económica que estalla en 1982 la cual tiene su origen décadas atrás, ha sido factor determinante en la agudización de la inseguridad pública, por tanto es pertinente hacer mención del contexto histórico anterior a esta crisis.

Se dice que el desarrollo económico en México ha tenido en el sector industrial su motor de crecimiento, en los últimos años este proceso de industrialización que se ha venido dando ha estado acompañado de una acelerada urbanización y modernización de la estructura productiva que revolucionó nuestro viejo esquema de desarrollo basado en el enclave agro-minero-exportador; por otro lado, este sector industrial que ha alcanzado ciertos niveles de integración y competitividad hacen de México una economía relativamente avanzada en el contexto de los países en vías de desarrollo.

Dicha industrialización tuvo su auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que se presenta una coyuntura favorable para que México pueda acelerar su industrialización apoyada en un proceso de exportaciones. En su inicio, dicho proceso tuvo un marco favorable del comercio internacional y de dinamismo del sector agropecuario permitiendo incrementar la producción manufacturera con divisas generadas en los sectores primario y terciario.

Para los años sesenta y con la continuación del mismo modelo económico se avanzó en el proceso de sustitución de importaciones de consumo duraderos y de consumo intermedio, así como el de algunos bienes de capital.

Para la década de los setenta, la dinámica de crecimiento de las manufacturas permitió a México figurar entre las 15 mayores potencias industriales del mundo, sin embargo en los primeros años de esta década, la estrategia de industrialización empezó a mostrar limitaciones: el sostenimiento

de elevadas tasas de crecimiento de la producción manufacturera requería de componentes importados y esto iba en continuo aumento.

Dentro del contexto internacional hubo una caída de los precios internacionales de nuestros productos primarios y una creciente inestabilidad de los mercados cambiarios, trayendo como consecuencia el hecho de que en 1976 se devaluara el peso frente al dólar después de 22 años de paridad fija.

El descubrimiento de los nuevos yacimientos petrolíferos y el exceso de liquidez mundial que generó un rápido flujo de capitales hacia el país permitieron superar en gran medida dicha crisis, no obstante, en los años posteriores se produjo una caída en los precios internacionales del petróleo y una alza de las tasas de interés en el exterior, lo cual repercutió severamente en la economía nacional debido a que estaba basada en los ingresos obtenidos por la venta y distribución de petróleo. A pesar de que se instrumentó una política de ajuste, ésta fue insuficiente para reducir el crecimiento elevado del gasto público y del endeudamiento externo, precipitando la crisis de 1982 que se manifestó en una disminución importante de la producción, elevada inflación, altos costos financieros y fuga de capitales.

La crisis de 1982 a diferencia de la de 1976 repercutió hasta el nivel de las unidades productivas, trayendo como consecuencia la disminución de la demanda interna. A su vez el endeudamiento en moneda extranjera multiplicó la deuda en pesos por efecto de las devaluaciones, elevando los costos de los insumos y bienes importados necesarios para la producción.

Los efectos directos que la población tuvo que enfrentar ante esta situación de crisis fueron: disminución del poder adquisitivo, alto nivel de desempleo, carestía, lo que provocó un incremento de los índices delictivos, agudizando con ello el problema de la inseguridad. Esto se explica si se toma en cuenta que ante tal situación, mucha gente buscó nuevas formas de satisfacer sus necesidades, recurriendo muchas veces a medidas ilícitas para obtener ingresos.

En el documento que se editó al término del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado intitulado *Las razones y las obras*, se señalan las principales acciones en materia de seguridad pública, las cuáles habían estado presentes al inicio de la década.

La preocupación por la seguridad pública se hizo presente desde el inicio de los ochenta debido a las cuestiones anteriormente expuestas que hicieron que se incrementara la criminalidad y la sensación de inseguridad en la población:

Ante esta situación, diversos sectores de la población alteraban sus horarios y patrones de conducta para disminuir el riesgo de ser asaltados, por ejemplo, en las zonas residenciales frecuentemente los vecinos se organizaban para mandar cerrar sus calles al tránsito y pagaban un vigilante que supervisara el acceso. Otro cambio notorio fué el que múltiples comercios pequeños, como abarroterías y farmacias realizaran sus ventas a través de rejillas de seguridad y en las tiendas más grandes o camiones repartidores se llevaban letreros donde decía que las cajas fuertes no podían ser abiertas por los empleados. Ante tal situación el Estado tuvo que reaccionar y tomar medidas al respecto, es por ello que en los siguientes apartados diremos específicamente cuáles han sido los planes y programas implementados para dar batalla al problema de la inseguridad pública.

1.5.1

RENOVACION MORAL

Desde el momento en que arrancó su campaña política para las elecciones presidenciales, Miguel de la Madrid, escuchó reiteradamente una demanda de la sociedad mexicana, acerca de que se atacara el añejo problema de la corrupción pública. El entonces candidato recogió dicha petición y la convirtió en una de sus tesis fundamentales de gobierno a través de la llamada Renovación Moral de la Sociedad.

Esta tuvo como objetivos fundamentales una revisión y reestructuración de organismos, fundamentalmente para la seguridad pública del país. Con esto se decidió atacar los problemas desde su raíz y sentar las bases para un sistema de seguridad pública en el país.

Como un reflejo de lo que constituyó la renovación moral, estuvo el hecho de que hubo un aumento en la tasa de denuncias del delito del fuero común durante 1983 y 1987, aunque no disminuyeron los delitos que tenían que ver con el incremento de la población que se dió en el mismo periodo, debido a que la aglomeración urbana fué campo propicio para el aumento de los índices delictivos, sin embargo, el hecho de que haya aumentado la tasa de denuncias fué consecuencia de que la población comenzaba a depositar una mayor confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia.

Ante el clamor por la falta de seguridad pública en la capital, el responsable de la Policía Preventiva del Distrito Federal, José Domingo Ramírez Garrido decidió enfrentar las críticas y dió a conocer algunos datos de los primeros cuatro meses de 1988, en donde se afirmaba “que habían ocurrido 471 robos menos de vehículos que en el mismo periodo del año anterior, 29% menos robos y 53% menos homicidios, habían aumentado 4% los robos a mano armada, pero esto se refería a las cifras absolutas y no tomaba en cuenta el crecimiento de la ciudad.” (De la Madrid H. M., 1988: 393-394)

Estas cifras no fueron suficientes para poder decir que se habían alcanzado grandes logros en cuanto a la demanda de seguridad, y el 21 de junio del mismo año, el General Ramírez Garrido fué llamado por la Secretaría de la Defensa Nacional para desempeñar nuevas tareas como militar, sustituyéndolo en su cargo el civil Enrique Jackson Ramírez, hasta entonces titular de la Delegación Cuauhtémoc.

Con la llegada del nuevo titular a la policía preventiva, las cosas no cambiaron, ya que de manera recurrente, la prensa elaboraba reportajes que algunas veces resultaban sensacionalistas, como por ejemplo los asaltos bancarios, de los cuales se decía en un informe del Comité de Seguridad de la Asociación Nacional Bancaria que “en el periodo de 1983 a 1987, hubo un promedio anual de 232 asaltos a sucursales bancarias, superando la cifra en un 18% en comparación con los 197 que se registraron en el periodo de 1980 a 1982, cuando los bancos todavía estaban en manos de particulares, siendo, sin embargo una cifra menor en comparación con países como Francia y España, con 1644 asaltos bancarios en un año, la primera y 3691 la segunda en 1984.” (Ibid.:394)

A lo largo del sexenio se emprendieron acciones encaminadas a lograr una renovación moral y esto se vió reflejado en una reunión de la comisión de moralización y modernización de los cuerpos policiacos, celebrada tan sólo un mes y medio después de la toma de posesión de Miguel de la Madrid.

1.5.2

PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

En enero de 1984 se puso en marcha el Programa Nacional de Seguridad Pública, planteando objetivos para la profesionalización, moralización y modernización de los cuerpos policiacos. Este programa funcionaría dirigido por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Procuraduría General de la República, el Departamento del Distrito Federal y los gobiernos estatales, así como de algunos municipios.

Como una primera parte de este programa se realizó un diagnóstico de las dificultades que enfrentaban las instituciones antes mencionadas en las 32 entidades de la República, además de una delimitación de las tendencias delictivas en cada zona. También se establecieron los convenios de coordinación en esta materia con cada entidad para redefinir los objetivos y alcances de la renovación hacia acciones específicas.

Posteriormente se realizó una revisión y actualización del marco jurídico en cada estado para definir las competencias y facultades de las policías. Se logró entonces que cada estado contara con una Ley Reglamentaria del Servicio Civil de Seguridad Pública.

También se revisaron códigos penales y las leyes de justicia en cuestión de faltas de policía y buen gobierno para así elevar los castigos por delitos cometidos por policías.

Otra actividad realizada y que mereció gran atención fue la capacitación y actualización del personal de seguridad; “de nueve academias de policía que existían en 1983, se pasó a 40 en 1988, de las cuales egresaron más de 22 mil servidores públicos al año.” (De la Madrid H. M. 1988)

También se reformaron los sistemas empleados para el reclutamiento, selección y promoción de los policías para evitar el ingreso de personas con antecedentes inconvenientes.

Este programa presta atención a las demandas ciudadanas en contra del comportamiento irregular de los policías, por ejemplo, el Programa de Denuncias e Irregularidades de la Secretaría General de Protección y Vialidad del DDF, resolvió entre enero de 1983 y marzo de 1988 más de 15 mil acusaciones contra policías de esa entidad. Asimismo puso atención en disminuir el problema salarial de las corporaciones policiacas, pues el deterioro de estos era significativo. En 1988 se logró “una elevación del presupuesto estatal para seguridad pública, procuración y administración de justicia de alrededor de 4.5%, logrando que ninguna corporación policiaca pagara remuneraciones inferiores al salario mínimo.”(Ibid.: 396) De esta manera se incrementaron los ingresos de los policías “de 17,000 pesos a casi 400,000 en promedio durante ese sexenio. Se establecieron normas escalafonarias en cuanto a ascensos, estímulos y premios para los elementos más destacados, además de otorgarles un seguro de vida.” (Ibid. : 744)

Fué instalado el centro de procesamiento electrónico y sistema automático de identificación de huellas dactilares, que permitía concentrar y procesar las 15,000 averiguaciones previas promedio que se iniciaban mensualmente en las agencias del ministerio público de la Ciudad de México y cotejar electrónicamente millones de huellas dactilares. Se crearon bancos de datos sobre la delincuencia y forma de operación de las corporaciones policiacas.

Finalmente se buscó una mayor participación social y colaboración de la ciudadanía a través de la instalación de Consejos Consultivos de Seguridad Pública en las 31 entidades federativas no incluyendo al Distrito Federal. A su vez las propias entidades promovieron la constitución de 487 Consejos Consultivos municipales.

No obstante la serie de acciones y planes emprendidos durante este sexenio, este problema continuaba debido a que se impedía mejorar la seguridad pública en la ciudad de México, ya que “el insuficiente número de policías (28,560 en 1988) para atender a 10.5 millones de habitantes era factor de inoperancia, además de una excesiva rotación de la plantilla de seguridad (14%) anual, lo cual implicaba una capacitación constante de los nuevos elementos, que restaba eficiencia a los cuerpos de seguridad, además de que no había una coordinación con la policía del Estado de México, y escasez de

recursos para ofrecer a estos servidores públicos condiciones laborales adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.(Ibid: 744)

Siguiendo con la política de atención a las demandas ciudadanas en cuestión de seguridad pública se implementaron reformas a la administración y procuración de justicia con la finalidad de hacerla eficiente, de ello se hablará en el apartado siguiente.

1.5.3

REFORMAS A LA ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA

Durante el sexenio de 1982 a 1988 se llevó a cabo una amplia reforma legislativa, teniendo como objetivo central modernizar el Poder Judicial Federal y los mecanismos para la impartición de justicia con el fin de garantizar a la ciudadanía una justicia imparcial, pronta y completa.

En materia de procuración de justicia se expidieron en 1983 nuevas leyes orgánicas de las procuradurías Federal de la República y General de Justicia del D.F. que regularon la estructura y funciones de ambas dependencias. En materia penal, dos años después se reformó el artículo 20 constitucional para actualizar la libertad provisional y fijar el máximo de la caución en días de salario mínimo.

Este periodo estuvo caracterizado por graves problemas económicos en el que la sociedad se manifestaba cada día más, la serie de modificaciones y actualizaciones en materia penal nacieron de la demanda de la población pretendiendo con ello fortalecer el Estado de Derecho de la nación.

Es también debido a la demanda popular que se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988, con la finalidad de impulsar la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a la organización y administración de la urbe, esta Asamblea creará la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil la cual estuvo presidida en primer lugar por Ramón Sosamontes y para la Segunda Comisión continuó Amalia García Medina.

A pesar de las acciones llevadas a cabo por el gobierno, el problema de la inseguridad pública no se pudo resolver, por el contrario, los índices delictivos aumentaban día con día.

CAPITULO 2

LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LOS PRIMEROS MESES DEL GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON

Tomando en cuenta el contexto anterior es que asume la presidencia del país Carlos Salinas de Gortari, quien retoma algunas acciones llevadas a cabo por la administración anterior en materia de seguridad pública y las cuales estuvieron contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. En dicho documento dentro del apartado de procuración e impartición de justicia se precisó modernizar el sistema jurídico para su mejor funcionamiento y para tratar de resolver los problemas por la vía de la legalidad, lo que fortaleció el Estado de derecho. El sistema de justicia debería basarse, entonces, en las garantías constitucionales.

El concepto de seguridad pública fue concebido en dicho plan como la consecución y mantenimiento de una vigencia del Estado de derecho, lo que implicaba el buen funcionamiento del sistema jurídico, lo que derivó en la salvaguarda de las personas, su libertad, sus bienes y su domicilio.

Cabe señalar que se hacía énfasis en reforzar la acción preventiva del delito y de conductas relacionadas con éste, tales como la farmacodependencia.

Algunos de los propósitos para mejorar la seguridad pública y la administración de justicia fueron:

- ⇒Levar a cabo una reforma administrativa que eliminara trámites innecesarios para evitar corrupción, discrecionalidad y abuso de poder. También se buscaba elevar la cultura jurídica de la población.
- ⇒Descentralizar la justicia mediante la utilización de mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, revitalizando los mecanismos de participación y colaboración de la comunidad, reubicando

- los centros de atención y decisión para que la procuración e impartición de justicia fuera más expedita en beneficio de la sociedad.
- ⇒ Revisar los programas de la carrera de Derecho para que fuera más compatible con los requerimientos de la sociedad actual.
 - ⇒ Modernizar al ministerio público a fin de que responda de mejor manera a las necesidades de la sociedad actual.
 - ⇒ Fortalecer las acciones frente al programa del narcotráfico.
 - ⇒ Propiciar la capacitación y superación vocacional de las corporaciones de seguridad y mejorar las remuneraciones de sus integrantes así como adecuar su organización y vigilar que su funcionamiento se ajuste a la ley y a los reglamentos sociales y el respeto a los derechos ciudadanos. También se pretendía modernizar los sistemas de rehabilitación del delincuente. (*Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994*)

Asumiendo el compromiso de brindar la tan ansiada seguridad a la ciudadanía, el gobierno salinista emprendió una serie de acciones que tuvieron como objetivos, por un lado aprehender y enjuiciar a individuos de diferentes esferas de la sociedad que habían cometido delitos valiéndose de sus posiciones privilegiadas, destacando el caso del líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina” a quien se le atribuyeron delitos de posesión, acumulación e introducción ilícita de armas; así como también el caso de Eduardo Legorreta, empresario acusado de fraude en la Bolsa Mexicana de Valores, además de la detención del Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los más importantes traficantes de droga y contacto principal del cártel de Medellín para la introducción de droga a los Estados Unidos.

Otro caso también muy publicitado fué el de José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad de la secretaría de Gobernación, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista Manuel Buendía en 1984.

De esta manera se trata de dar la imagen de una lucha frontal en contra de la impunidad que existía dentro de las más altas esferas de poder

Sin embargo cabe hacer mención de que dichas acciones, por otro lado, estuvieron encaminadas a legitimar al gobierno salinista, el cual en estos

tiempos era sumamente cuestionado a raíz del supuesto fraude electoral en las elecciones de 1988.

2.1

PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA CREACION DE LOS COMITES DELEGACIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA

En el marco de un mayor compromiso por otorgar una mejor seguridad, en enero de 1989 el Regente de la Ciudad dio a conocer el programa de seguridad que contenía los siguientes puntos.

Integración de Comités Delegacionales de Seguridad Pública. El domingo 8 de enero de 1989 el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Licenciado Manuel Camacho Solís, en atención a una de las más constantes demandas de la población capitalina instaló los Comités Delegacionales de Seguridad Pública, los cuales tienen la finalidad de mejorar los aspectos de la prevención de la delincuencia en el Distrito Federal mediante la participación de los ciudadanos, las organizaciones sociales y los partidos políticos en general.

Se menciona que dichos comités son órganos de análisis, consulta y opinión de las delegaciones del Distrito Federal en materia de procuración de justicia y seguridad pública, por otro lado, dichos comités están integrados por los siguientes servidores públicos del DDF, los cuales tienen el carácter de vocales con voz y voto:

I) El delegado correspondiente, quien lo preside siendo indelegable esta función.

II) El jefe del sector policiaco de la Secretaría General de Protección y Vialidad adscrito a la delegación respectiva.

III) El subdelegado jurídico y de gobierno respectivo.

IV) Un representante de las funciones institucionales en materia de participación y organización comunitaria.

También tendrían el carácter de vocales de los Comités Delegacionales, los ciudadanos que aceptaran participar en los mismos previa invitación formal y que serían preferentemente:

I). El presidente de la Junta de Vecinos que corresponda, quien en su caso ocupará la secretaría del Comité.

II) Los presidentes de las asociaciones de residentes que correspondan.

III) Los directivos o representantes de asociaciones, sociedades, patronatos u organizaciones similares de carácter social y privado que tengan por objetivo la atención de acciones relacionadas con la prevención o asistencia social.

Con carácter de vocales concurrirán al comité los servidores públicos de la PGJDF los cuales se presentarían en esa dependencia en las áreas de:

I) Ministerio Público y Policía Judicial

II) Servicios a la ciudadanía

III) Coordinación general y desconcentración

Estos comités delegacionales sesionarán en el local que designará el presidente previa convocatoria del mismo por lo menos mensualmente y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

Dentro de las principales funciones de los Comités Delegacionales de Seguridad Pública se encuentran:

I) Detectar las zonas de conflicto con mayor índice de delincuencia de la circunscripción territorial de cada una de las delegaciones.

II) Participar en la elaboración del Programa Delegacional de Seguridad Pública y evaluar la ejecución del mismo.

III) Estudiar y proponer a la PGJDF y a la SGPyV del DDF mecanismos de coordinación entre dependencias y entre delegaciones, así como desconcentración tendiente a incrementar la cobertura y calidad de los servicios que tienen encomendados.

IV) Promover la participación ciudadana mediante la difusión de los respectivos programas de Seguridad Pública que expidan las autoridades competentes.

V) Proponer a la PGJDF y a la SGPyV las acciones a emprender para la prevención de delitos y su impunidad. (Asamblea de Representantes del Distrito Federal *Acuerdo por el cual se crean los Comités Delegacionales de Seguridad Pública*. 1989)

La seguridad depende de la capacidad del gobierno para hacer frente a la delincuencia, a su capacidad organizativa y a sus acciones, la seguridad mejora con la profesionalización y eficacia de las policías, la mejoría de sus medios materiales, la eficacia en la procuración de justicia, la honestidad de los tribunales y el apego a la legalidad en los nexos de autoridad. La seguridad está influida por las condiciones sociales adversas, por las faltas de alternativas de ocupación de la juventud, por el clima de relaciones entre las instituciones y la sociedad y por la forma de operar el sistema político.

Si bien es cierto que la seguridad lograría mejores resultados según la capacidad organizativa del gobierno, así como con la dotación de equipo para hacer frente a la delincuencia y con la eficacia de quienes procuran justicia y honestidad por parte de los mismos, no menos cierto es también el hecho de que todo esto no pasa de ser un simple propósito, y esto es fácilmente comprobable cuando la sociedad manifiesta que la dotación de equipo y la muy comentada profesionalización de los cuerpos policiacos de ninguna manera garantiza su honestidad, ni tampoco la aplicación de la ley con apego a derecho.

Además es del dominio público que gran parte de los actos de corrupción que se suscitan se dan incluso al interior de los tribunales y ministerios públicos que en el papel, deben ser garantes de la impartición de justicia.

Ahora bien, es importante recalcar que el lograr una buena seguridad pública no consiste en crear cada vez más leyes en esta materia, en todo caso lo que debiera hacerse es respetar el Estado de derecho que nos rige, pero si las autoridades encargadas de vigilar la vigencia del mismo son las primeras en violentar dicho estado, esto acarrea como consecuencia que la sociedad en su conjunto engendre una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad.

Otro factor que decisivamente contribuye a la inseguridad son las condiciones sociales precarias en las que se encuentra inmerso el sector de la población correspondiente a la juventud, que al no tener oportunidades de desarrollo es más propensa a delinquir. Sin embargo este sector es estigmatizado por la sociedad como aquéllos que generan robos, violencia, entre otros delitos, sin tomar en cuenta las condiciones sociales en que se desenvuelven.

Algunas otras medidas importantes que se dieron en este sexenio sobre la seguridad pública fueron:

Por lo que respecta a los planes y programas de seguridad pública para combatir la delincuencia, tenemos que una vez que entró en vigor la Ley de Seguridad Pública del D.F. la cual recogía las preocupaciones de la sociedad y del gobierno en esta materia para tener un desarrollo y una convivencia armónica ante los problemas de la delincuencia y criminalidad, surgió el Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal 1993-1994 cuya elaboración estuvo trabajada de manera conjunta entre el DDF y la PGJDF, cada una en sus respectivos ámbitos de competencia y tomando como marco el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el cual establecía que “el objetivo primordial que se persigue en relación a los problemas de la Ciudad de México es mejorar la calidad de la vida de los habitantes...el problema de la inseguridad que afecta hoy día a gran parte de la población tiene una génesis completa mas allá de la normatividad y la administración”.

Tomando en cuenta lo anterior se concibe a la Seguridad Pública como la consecución y mantenimiento de una efectiva y cotidiana vigencia del Estado de Derecho, lo cual debe brindar protección permanente tanto a nivel

individual como colectivo o social con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas, su libertad, sus bienes y su domicilio.

Dentro del Programa de Seguridad Pública para El Distrito Federal se contemplaban las acciones que en forma planeada debieran realizar los cuerpos de seguridad pública en el corto, mediano y largo plazo para garantizar la seguridad, la cual corresponde en forma exclusiva al Estado atendiendo el marco de respeto a las garantías individuales de acuerdo a los siguientes objetivos.

- I. Mantener el orden público.
- II. Proteger la integridad física de las personas así como de sus bienes
- III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía
- IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos
- V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres

Dentro de este programa destacaba la tan mencionada profesionalización de la policía, siendo éste uno de los fines centrales. Además, dentro de esta ley se tenía en cuenta el establecimiento de una verdadera carrera policial que diera como resultado una actuación eficiente de la policía.

Asimismo se establece como obligación del D.F. y de la Procuraduría, fomentar la colaboración de organizaciones vecinales, asociaciones y sociedades de carácter privado, así como de la ciudadanía en general en los subprogramas delegacionales de seguridad pública.

En dicho programa se presentan las siguientes líneas de estrategia para contribuir al bienestar, la tranquilidad y la convivencia social como parte de la seguridad pública.

A.-Profesionalizar los cuerpos de seguridad pública.

Ampliar y fortalecer la capacidad preventiva en la comisión de delitos y de protección ciudadana.

Aumentar el número de policías y de agentes del ministerio público e intensificar los procedimientos científicos y tecnológicos en la investigación criminológica

B.-Acrecentar la respuesta institucional en casos de siniestros y desastres

C.-Aumentar la participación y colaboración ciudadana en la prevención de actos delictivos.

D.-Ampliar los niveles de seguridad jurídica de la población y promover la permanente revisión y actualización de las disposiciones legislativas y reglamentarias. (*Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal*, 1993: 10)

Una vez presentados de manera general los principales puntos del Programa de Seguridad Pública del D.F. podemos afirmar que las intenciones siguen siendo las mismas, profesionalizar a la policía y con ello la obtención de ascensos para evitar el problema de la corrupción. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que los índices delictivos han aumentado, aunque no por ello deja de reconocerse el compromiso que ha adquirido el Estado por otorgar una mayor y mejor seguridad a la población, creando con ello una cultura de la legalidad y la prevención de delitos.

Siguiendo con este Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal, cabe hacer mención que aunque se afirmaba que debía existir un subprograma por delegación política -tal y como quedaba asentado dentro del Acuerdo por el cual se crearon los Comités Delegacionales de Seguridad Pública- esto en realidad no se llevó a efecto ya que se daba el caso de que en la mayor parte de las delegaciones no existía dicho documento, tal es el caso de Azcapotzalco.

No obstante lo anterior, sí se procuró combatir la inseguridad a través de una serie de subprogramas por parte de la Secretaría General de Protección y Vialidad, los cuales abarcaban a todo el Distrito Federal, destacan entre ellos los siguientes:

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL SUBPROGRAMAS VIGENTES EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

1. De vigilancia compartida
2. De reclutamiento
3. De protección al hogar
4. De protección a escolares
5. De seguridad y orientación a la ciudadanía (seguridad integral)
6. Para contrarrestar el robo de vehículos y autopartes
7. De distribución nocturna
8. "Conjunto"

Vigilancia Compartida

Mediante el acercamiento con las organizaciones vecinales y comités de seguridad, se busca adecuar los servicios proporcionados a las demandas e inquietudes de la población.

Reclutamiento Vecinal

Se invita a la población para que ingrese a la carrera policial, através de propaganda publicitaria y por conducto de las organizaciones vecinales.

De Protección al Hogar

Mediante el patrullaje constante y una mayor presencia policial en las calles, se brinda protección en unidades habitacionales, zonas residenciales, colonias populares, barrios y pueblos, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos, inhibir los robos a casa habitación y detectar bandas de delincuentes.

De Protección a Escolares

Se desarrolla mediante la aplicación de operativos de patrullaje y vigilancia, formación de escuadrones juveniles de protección voluntaria, la integración de padres de familia a programas de educación vial e impartición de pláticas y cursos sobre la vialidad y el Reglamento de Transito.

De Seguridad y Orientación a la Ciudadanía (Seguridad Integral)

Se estrechan los puntos de contacto con la población, mediante la realización de pláticas, la captación de demandas de servicio, inquietudes y sugerencias, la instrucción en materia de seguridad y el acercamiento de los servicios que proporciona la Secretaría General de Protección y Vialidad

Para Contrarrestar el Robo de Vehículos y Autopartes

Se ha reforzado el patrullaje móvil, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, principalmente en zona de alto riesgo de estos ilícitos.

Distribución Nocturna

Se ha reforzado la vigilancia en las rutas para el transporte de mercancías y en zonas de carga y descarga, durante los horarios nocturnos previamente establecidos, a fin de brindar protección y seguridad a los transportistas.

“Conjunto”

Se instrumenta con la participación de la Policía Preventiva y la Judicial capitalina, a fin de prevenir la comisión del delito en todas sus modalidades, así como de disuadir las acciones de bandas en diversas zonas de la ciudad, abarcando la vigilancia de puntos estratégicos de las 16 delegaciones políticas, salidas carreteras, estaciones del metro y transporte público. (Secretaría de Seguridad Pública, 1995)

Con todo lo anterior se da una visión general de lo que constituyeron los planes y programas de seguridad pública para el Distrito Federal así como de los Comités Delegacionales en la misma materia, queda de manifiesto entonces el compromiso por parte del Estado por brindar una mejor seguridad a toda la sociedad por igual.

A continuación se mencionan algunas otras acciones importantes que se realizaron en materia de seguridad pública en este mismo sexenio.

Reestructuración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría General de Protección y Vialidad. Con el propósito de llevar a cabo una transformación de la PGJDF se destaca el hecho de la creación del Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 1990-1994 elaborado por la Procuraduría General de la República en coordinación con los diversos sectores que intervenían en la impartición de justicia, como el poder judicial, federal y la misma PGJDF.

No obstante lo anterior, uno de los obstáculos para que pudieran llevarse a cabo dichos propósitos fue la inestabilidad que se dio al interior de la PGR y de la PGJDF ya que cada una de estas dependencias fue dirigida por cuatro funcionarios distintos durante el sexenio, cada uno con su particular forma de trabajo, resultando de esta manera muy difícil frenar la violencia debido al hecho de que el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos resultó nulo generando con ello impunidad y desconfianza dando pauta a que el índice delictivo creciera mas y por tanto se multiplicara la inseguridad.

En el caso de la Secretaría General de Protección y Vialidad, desde un principio se pensó que una de las medidas para abatir la inseguridad que instrumentó esta dependencia fue la de nombrar a personas de reconocida honradez e integridad moral, pero paradójicamente ocuparon el cargo personas que de antemano estaban catalogadas como altamente corruptas. En primer lugar fue nombrado Javier García Paniagua quien en coordinación con el Regente Manuel Camacho Solís determinaron la creación de la Dirección de Servicios de Inteligencia (DSI) concebida como un órgano de apoyo (Policía Secreta) para la corporación, quedando al frente de esta dependencia Miguel Nazar Haro, el cual por presiones hacia su persona a raíz de la vinculación que se le hacía con bandas de asaltantes renunció a su cargo en 1990.

Para Julio de 1990, la DSI fue duramente criticada ya que varios de sus miembros se encontraban implicados en asesinatos como el del periodista Manuel Buendía, lo cual provocó la desaparición de dicha dirección.

Meses después al no poder combatir la corrupción tan evidente García Paniagua fue removido de su cargo y en su lugar quedó el policía de carrera Santiago Tapia Aceves, pero diez meses después de estar al frente de la policía de la ciudad se vio involucrado en ciertos delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del cargo por lo que fue removido y encarcelado, aunque tiempo después salió libre bajo fianza.

En enero de 1993 fue nombrado René Monterrubio, tratando de superar viejas prácticas y continuar con la profesionalización de la policía. Entre sus principales acciones al frente de esta dependencia se encuentra la creación de un nuevo cuerpo policiaco llamado *Grupo Especial de Disuasión "Bengala"* que estaba integrado por 120 elementos bien capacitados y armados. Sin

embargo fue disuelto al verse involucrado en problemas con la ciudadanía tales como extorsión, corrupción etcétera.

Para octubre de 1994 el nuevo regente capitalino, Manuel Aguilera Gómez anunció la creación de un nuevo cuerpo de policía denominado *Proyecto Transformación 2000* cuya característica sería que habría parejas de policía patrullando a pie de tierra para tener mayor contacto con la población. Los elementos que se reclutaran debían ser menores de 35 años y capacitados en el Instituto Técnico de Capacitación Policiaca, equipados con chalecos antibalas y con un salario 60% mayor que el de los policías preventivos. Se abrirían 110 minicuarteles en distintas zonas de la ciudad, lo que significaría a largo plazo la triplicación del número de policías, además existirían cuatro turnos en vez de tres, teniendo un horario de reemplazo para tener un servicio más eficiente.

Para finalizar el año de 1994 la Secretaría General de Protección y Vialidad contaba “con un total de 74,891 miembros en las diversas corporaciones, distribuidos así: 50,000 auxiliares, 15,000 bancarios e industriales y 10,000 preventivos.” (Sánchez Mejorada, Cristina, 1995: 12)

En un estudio que realizó Rafael Ruiz Harrell, llamado *Gobierno e Impunidad* y que estuvo publicado en la sección *La Ciudad y el Crimen* en el diario *Reforma* en septiembre de 1994, se mencionan algunas cifras importantes en materia de delitos mostrándose como de 1989 a 1994 éstos se incrementaron en un 100% sobre todo los cometidos con arma de fuego en el Distrito Federal “pasando de 16,894 en 1989 a 41,221 en 1994”. Sólo en este último año se registró un incremento de 45.7% . Por otro lado las averiguaciones previas en las cuales figuraba el delito de portación de arma de fuego muestra un crecimiento equivalente debido a que pasó de 1,652 en 1989 a 3,367 en 1994.

Visto lo anterior puede asegurarse que la serie de acciones emprendidas por el gobierno salinista en materia de seguridad pública no cumplieron con los objetivos deseados y para los cuales fueron creadas debido a que se seguía asociando a las corporaciones policiacas con la corrupción, dando paso a una creciente desconfianza que a su vez engendró una mayor inseguridad.

2.2

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Otro suceso importante en la gestión de Carlos Salinas de Gortari estuvo relacionado con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, cuyo fin fue proteger y respetar la integridad de todos los individuos en el territorio nacional, además de que pretendía crear un Estado mexicano moderno elevando posteriormente su actuación a rango constitucional para darle autonomía debido a que en un principio dependía de la Secretaría de Gobernación.

Una figura importante de la comisión de la Secretaría de Gobernación fue la del Ombudsman, el cual funcionaba como garante del cumplimiento de todas las recomendaciones que surgieran en esta comisión. Esta expresión sueca de ombudsman no tiene en el castellano una traducción exacta o única pero frecuentemente se le interpreta como delegado, representante, defensor e incluso como procurador.

Con esta iniciativa fueron creándose en los diversos estados de la República comisiones análogas sobre derechos humanos, pretendiendo con ello crear una cultura de protección de los derechos fundamentales del hombre.

Esta comisión desde su creación fue concebida como una institución jurisdiccional para el control de la legalidad y la defensa de los derechos humanos limitada únicamente a emitir recomendaciones hacia aquellas dependencias, funcionarios o cuerpos policiacos que violaran tales derechos. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rendiría al primer mandatario un informe público de labores cada seis meses.

Algunos datos interesantes desde su creación fueron, por ejemplo, que a los seis meses de haber sido creada la CNDH, había recibido “1743 quejas, de las cuales 397 se habían concluido; en 200 casos no se había podido avanzar porque el agraviado no había proporcionado suficiente información y en las 746 restantes las querellas estaban en trámite” (*Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994* : 305)

Como se podrá observar, a partir de la creación de dicha Comisión, la población tendió a denunciar toda la serie de delitos y abuso de autoridades, principalmente de la PGR, y sobre todo si se toma en cuenta que antes no existía un organismo de este tipo. Para junio de 1994, el presidente del organismo, Jorge Madrazo, presentó el segundo informe anual de la Comisión, el funcionario destacaba en esta ocasión que “entre el 26 de mayo de 1993 y el 25 de mayo de 1994, la Comisión había recibido 8804 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, las cuales se sumaban a las 2281 que estaban pendientes de resolución, para sumar un total de 11,085. En este periodo se resolvieron plenamente 9767 quejas y quedaron pendientes 1117” (Ibid.)

Si se toma en cuenta que la seguridad pública es un derecho contemplado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éste en repetidas ocasiones no es respetado y en cambio es violentado en muy diversas formas como podría ser a través de detenciones arbitrarias (como las llamadas razzias), extorsión, abuso de autoridad, entre algunas formas de impunidad.

Ahora bien, una de las denuncias que con mayor frecuencias se presentan dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, es aquélla que tiene que ver con toda una serie de quejas en contra de la policía, aunque finalmente muchas quedan impunes debido a la gran corrupción que impera entre ministerios públicos, jueces, jefes policiacos y policías preventivos así como judiciales existiendo un contubernio que genera a su vez una impunidad cada vez más exacerbada. De ahí que recientemente se habla en diversos foros y por afamados especialistas en la materia de la creación de una cultura de la legalidad, la cual consista principalmente en un respeto y cumplimiento de la ley sobreponiendo intereses personales en aras de la justicia, revalorizando con ello la ética profesional. A su vez, debe hacerse hincapié en que esta cultura de la legalidad debe ser siempre acompañada del respeto a los derechos humanos para que pueda existir una cabal convivencia entre la sociedad.

Nosotros consideramos que si realmente existiera un equilibrio entre la nueva cultura de la legalidad y los derechos humanos podría darse un mejor clima de confianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia,

aunque lo que en la actualidad prevalece es una tendencia hacia la no denuncia, argumentándose para ello que es una gran pérdida de tiempo debido a la serie de trámites burocráticos, además de que se piensa anticipadamente que no se podrá hacer justicia ante el ilícito.

Otro aspecto que nos habla de la seguridad pública y los derechos humanos es aquel relacionado con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal vía su Comisión de Seguridad Pública, la cual en el año de 1992 estaba presidida por Amalia García Medina; por medio de ésta se llevó a efecto durante este mismo año una audiencia pública sobre el tema mencionado, la cual contó con importantes expositores como juristas, representantes ciudadanos, así como de representantes de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos.

A manera de resumen podemos decir que en esta audiencia se abordaron temas como el marco jurídico en el cual se sustenta el fundamento legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que en ese momento no contaba con una ley orgánica.

Otro tema fue el de la represión hacia los sectores marginados como es el caso de las trabajadoras del llamado sexoservicio, en donde se denunciaron las numerosas extorsiones de que son sujetas estas mujeres por parte de los cuerpos policiacos cuando se efectúan redadas, denunciaron con ello que al no existir una reglamentación que les permita trabajar sin inseguridad, son presa fácil de autoridades y funcionarios menores, aunque cabe hacer mención de que existe un nuevo sector de trabajadores del sexo conocidos como "trasvestis" dentro de los cuales existen algunos que se dedican al asalto violento, provocando con ello ser factor de inseguridad.

También se abordan las diferentes formas en que los jóvenes de la periferia de la ciudad son víctimas de violaciones en sus derechos humanos al ser aprehendidos sólo por su aspecto físico o su apariencia, sin embargo cabe decir que dicho problema va mas allá de la simple reunión de jóvenes a los que se les relaciona con bandas organizadas, cuando en realidad, el problema de fondo es que no hay oportunidades de desarrollo (trabajo, recreación, educación, etc.) aunado al problema de la falta de servicios básicos y a la desintegración familiar que impera al interior de gran parte de las familias a

las que pertenecen dichos jóvenes, sin embargo no por ello se justifica que transgredan las leyes establecidas y provoquen un clima de violencia.

Finalmente se afirma que las funciones de la Policía Preventiva del Distrito Federal están encaminadas hacia la prevención del delito y para mantener la seguridad y orden público, así como detener y presentar al juez calificador a los infractores notificando citatorios además de tener el deber de comparecer por el motivo que se les solicite por faltas de policía y buen gobierno, todo esto es una obligación ya que se tiene un ordenamiento jurídico que así lo determina, pero que desafortunadamente como ya se ha visto en este apartado la realidad es diferente debido a que este cuerpo de seguridad realiza acciones que incurren en la violación tanto de garantías constitucionales como de derechos humanos, asociando a los elementos policiacos con mafias, por tanto ¿quién vigila a los policías?

Si bien es cierto que se estaban alcanzando ciertos avances en materia de seguridad pública, tal y como se muestra en datos anteriores, para inicios de 1994, la violencia se recrudece transformándose en una locura colectiva manifestada a través de algunos hechos violentos como:

- . El surgimiento del grupo insurrecto denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien declaró la guerra al gobierno y al ejército mexicano en el estado de Chiapas el primero de enero de 1994.
- . En el mismo mes estalla una bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad; después siguieron los derrumbamientos de torres de energía eléctrica en varias entidades del país.
- . El 14 de marzo se llevó a cabo el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú.
- . El 23 de marzo es asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta.
- . El 31 de marzo se registra un enfrentamiento violento entre el cuerpo de granaderos de la SGP y V y militantes del Frente Popular Francisco Villa, en la delegación Iztapalapa, resultando más de 20 personas heridas y varios daños materiales.

Debemos decir que algunos de los hechos presentados implican seguridad nacional y otros son perpetrados hacia personas públicas o empresarios, sin embargo no por ello dejan de afectar a la sociedad en su

conjunto, propiciando que esta misma se manifieste de manera violenta, como en el caso del 19 de mayo de 1994, cuando cuatro presuntos delincuentes fueron linchados y masacrados en manos de la población de un municipio en el Estado de Morelos.

Es por esto y por otros tantos actos delictivos que afectaron a la sociedad por igual, que el Diputado Ramón Sosamontes opinaba que desde 1993 el problema de la seguridad pública no había podido ser satisfecho y por tanto era uno de los fracasos del régimen.

Como una de las últimas medidas en materia de seguridad por parte del gobierno federal, una vez que la violencia se desbordó fuera de la ciudad de México, el Gabinete de Seguridad Nacional, presidido por el ejecutivo, tomó la decisión de crear la Coordinación Nacional de Seguridad Pública en abril de 1994 quedando al frente el Lic. Arsenio Farrell Cubillas. Esta nueva dependencia se planteaba coordinar las acciones entre las Procuraduría, policías y las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y el Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, quizá por las críticas hacia esta coordinación, no se volvió a saber nada de ella pues se decía que su creación era inconstitucional, además de que no por el decreto que le dio vida se terminaría con la inseguridad, en todo caso se necesitaban acciones concretas y efectivas con estricto apego a la ley.

2.3

LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA

Antes de ahondar en este apartado hay que mencionar que la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal careció de una Comisión de Seguridad Pública; fue hasta la segunda asamblea cuando se consolidó la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, ya para 1994 la composición de esta comisión fue dividida y se formaron la Comisión de Protección Civil y la Comisión de Seguridad Pública.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el periodo comprendido entre noviembre de 1991 y octubre de 1994 realizó acciones que a continuación se enumeran.

Desde el momento en que inició su funcionamiento esta comisión se planteó como objetivo velar por la tranquilidad y respeto a la integridad de los habitantes de la ciudad, se trabajó para ello bajo el mecanismo de audiencia pública permanente con respeto a las tendencias políticas y con la convicción de conquistar la dignidad ciudadana.

Se siguieron para ello dos líneas de acción, la primera para atender las demandas ciudadanas de seguridad y respeto a las garantías individuales, brindando respaldo a las denuncias y estimulando la participación de la población tanto individual como colectiva; la segunda línea estaba dirigida a la revisión de la normatividad y análisis de la realidad con el fin de elaborar una nueva legislación que garantizará el respeto a los derechos de la población.

Sin embargo hay que mencionar que esta comisión careció de facultades para legislar, aunque sí tenía el derecho de iniciativa para aprobar bandos, reglamentos y ordenanzas.

De las acciones sobresalientes puede nombrarse la Ley de Seguridad Pública, para su elaboración se constituyó un grupo de trabajo entre diputados, servidores públicos, juristas y asambleístas. En el mes de julio de 1993 se promulgó la nueva Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, la cual tuvo como objetivo sentar las bases para la prestación del servicio de la seguridad, así como regular los servicios privados, de esta Ley deriva también el Programa de Seguridad Pública.

Puede observarse que dicha Ley contemplaba toda una serie de aspectos como los siguientes:

- La formulación de un Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal.
- Principios de actuación de los cuerpos de seguridad pública.
- Profesionalización de los cuerpos policiacos.
- Derechos que habrían de mantener los miembros pertenecientes a los cuerpos de seguridad.
- Régimen disciplinario.
- Coordinación entre las corporaciones encargadas de brindar seguridad.
- Participación vecinal y ciudadana para una mejor seguridad.

Por lo que se refiere al primer punto, sobre la formulación de un Programa de Seguridad Pública, con ello se pretendía dirigir en forma planeada y coordinada las acciones de los cuerpos policiacos en el corto, mediano y largo plazo con la finalidad de garantizar una mejor seguridad. Dicho programa tendría un carácter prioritario y establecía que su ejecución se ajustaría a la disponibilidad presupuestal anual así como a las disposiciones que sobre el particular dictaran el DDF y la PGJDF.

En lo que respecta a los principios de actuación de los cuerpos de Seguridad Pública, se subraya que deben actuar con decisión y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes, en la que no debe haber discriminación alguna en razón de su raza, condición social o por algún otro motivo.

Por lo que toca a la profesionalización de los cuerpos policiacos, se puede decir que este fue uno de los fines centrales de la Ley. De manera general puede afirmarse que con esto se buscó una mejor y más eficaz

prestación del servicio de la seguridad vía la institucionalización de la carrera policial, aunque para ello tuvieran que cubrirse aspectos como los siguientes:

La Formación Policial, que buscaba una transformación radical de los elementos policiacos a través de programas de actualización en materias legislativas y científicas en todos los niveles, es decir, se intentaba alcanzar una formación teórica y práctica.

El Sistema de Carrera Policial, que buscaba a través de la capacitación, adiestramiento y educación, determinar las jerarquías y niveles de los elementos que compondrían la policía; además aquí también se contemplaban las condecoraciones, estímulos y recompensas como medidas que contribuyeran a su profesionalismo y motivación de dichos elementos para que estos a su vez desempeñaran mejor sus labores.

Cabe hacer mención que gran parte de esta profesionalización se desarrolló a través de la Academia de Policía, logrando impartir 158 cursos a 4367 elementos nuevos y operativos, 90% más que en el informe anterior. Asimismo se alcanzó una cobertura de 75 cursos en la capacitación de 1663 elementos administrativos de protección y vialidad.

En cuanto a los derechos de los miembros de los cuerpos de seguridad pública se establecieron no sólo prestaciones de carácter laboral o económico sino diversas disposiciones que tenían relación con aspectos de estima, mejoramiento social y cultural, como por ejemplo, los concursos de promoción para ascender y contar con la capacitación y adiestramiento más avanzado.

Por lo que compete al aspecto de régimen disciplinario se propusieron algunas acciones con el fin de mantener el control de los elementos que conformaban el cuerpo policiaco de seguridad pública, entre ellos están:

Correctivo disciplinario a aquellos que cometiesen alguna falta a las normas disciplinarias que cada uno de los cuerpos policiacos establezca y la cual no amerite destitución, en atención al tipo de falta sería amonestación, arresto hasta de 36 horas y cambio de adscripción, suspensión temporal o destitución dependiendo de las causas que lo motiven, ello lo determinará el Consejo de Honor y Justicia, quien es el órgano colegiado competente para resolver las faltas graves en que incurran los elementos policiacos.

Por lo que hace a la coordinación entre las corporaciones encargadas de brindar seguridad (DDF, SGPyV, hoy SSP y PGJDF) se buscaba entablar acciones conjuntas entre dichas dependencias y los gobiernos municipales y estatales vecinos.

Y como algo novedoso dentro de esta Ley de Seguridad Pública, se le otorga un apartado a la Participación Ciudadana en el que se establecía la obligación tanto del DDF así como de la PGJDF de fomentar la colaboración de las organizaciones vecinales, asociaciones y sociedades de carácter privado.

También se redactó la Ley que creó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se sustituyó el Reglamento de Policía y Buen Gobierno por el de Justicia Cívica.

Es de importancia mencionar que esta comisión reconoció haber puesto más empeño a la cuestión de seguridad pública, dejando de lado lo referente a la protección civil.

De las acciones de la comisión, que además son nuevas formas de participación ciudadana, fueron aquellas orientadas a apoyar demandas de organizaciones vecinales, también se promovieron reuniones con la asistencia de representantes de la Policía General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Protección y Vialidad. También se llevaron a cabo reuniones en todas las delegaciones políticas del Distrito Federal para promover e insistir en el funcionamiento de los Comités de Seguridad Pública y los de Protección Civil que encuentran sus sustento en la Ley y Reglamento respectivo.

Es significativo el número de policías que solicitaron el apoyo de la comisión para obtener mejores condiciones de trabajo y para hacer frente al problema de la corrupción dentro de las corporaciones policiacas, así como el pleno respeto a sus garantías individuales y demandar el comportamiento arbitrario del que son víctimas por parte de sus superiores.

Desde los primeros meses de 1992 la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la ARDF, retomando lo hecho por la primera Asamblea y estudiando las acciones llevadas a cabo en otros países elabora los lineamientos generales que debería contener la Ley de Seguridad Pública,

entre ellos destacan un mayor nivel académico para poder formar parte del cuerpo policiaco, asimismo se exigía el respeto a los derechos humanos por parte de los encargados de la Seguridad Pública y la ampliación de los márgenes de participación ciudadana.

La iniciativa de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue fruto de las propuestas de crear un organismo que hiciera valer los derechos humanos en la capital del país. Inicialmente esta Ley fue aprobada por la Asamblea y posteriormente por las cámaras legislativas con el fin de resolver al justo reclamo social.

La Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno y su Reglamento respectivo fueron revisados y actualizados convirtiéndose en Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el D.F. el cual tiene la finalidad de sancionar actos u omisiones que sin ser delitos transgredan la convivencia o alteren el orden y la seguridad de las personas.

El Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 1993-1994 es derivado de la Ley de Seguridad Pública para el D.F. , contiene lineamientos generales propuestos por la asamblea y que fueron presentados al Jefe del Departamento del Distrito Federal quien junto con el procurador General de Justicia son quienes elaboran dicho programa.

Esta Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil fue presidida por Amalia García, quien hizo eco de las demandas ciudadanas en materia de seguridad, a este respecto la asambleísta opinaba en una entrevista realizada por el diario "*Reforma*" el 1º de octubre de 1994 que "esta desconfianza (hacia los cuerpos de seguridad) es acertada. No se ha logrado avanzar en seguridad pública pese al valor cívico de quienes son víctimas de abusos. No se ha logrado el profesionalismo de la policía."

Esto evidenciaba que a pesar de las acciones llevadas a cabo por esta comisión, el problema de la seguridad persistió y fue haciéndose cada vez mayor, sin embargo con la creación de este tipo de órganos de participación, el problema fue atendiendo de manera formal y se trataba de hacer con apego a la ley además con un mayor acercamiento de la sociedad civil con las instituciones.

Después de haber mostrado las acciones llevadas a cabo en el periodo presidencial de Carlos Salinas daremos a conocer un breve informe de las primeras acciones realizadas por el presidente Ernesto Zedillo en el corto tiempo que ha estado al frente del gobierno del país, esto con la finalidad de dar a conocer la información más actual y las líneas de acción que seguirá su gobierno en la materia que estamos analizando.

2.4

ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO HASTA MAYO DE 1995

A pesar de las acciones llevadas a cabo en el sexenio anterior en materia de seguridad pública las cuales no tuvieron los efectos deseados, para 1994, Ernesto Zedillo asume la presidencia del país, el cual se encontraba inmerso en un clima de inseguridad severa, esto lo hace patente en su discurso de toma de posesión, el primero de diciembre de 1994; posteriormente hace énfasis en este mismo tema en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el cual dedica un amplio apartado referente a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. En dicho plan se hace referencia a una serie de estrategias y líneas de acción en las cuales se establecen las bases para consolidar un Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las siguientes características: Estándares nacionales de calidad en el servicio de la seguridad, creando una auténtica carrera policial sustentada en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y los riesgos de su labor; mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con respecto a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, este sistema estará coordinado por un consejo nacional.

Se hace particular mención en este documento de un proceso permanente de profesionalización de los recursos humanos de la seguridad pública con el objeto de obtener calidad y eficiencia. Para tal efecto se creará el Centro Nacional de Formación Policial.

Dentro de este Plan Nacional también se contempla la reglamentación del Registro Nacional de Servicios Policiales como instrumento para tener un mejor control de los recursos humanos y una coordinación eficaz. En este sentido se habrá de integrar y sistematizar la información con que cuentan las instituciones de seguridad pública y su personal, para ello habrá de crearse un sistema de información policial en donde puedan consultar las autoridades federales, estatales y municipales la información de delincuentes, bandas,

formas delictivas y tipos de armamento de las organizaciones criminales, esto significa atacar de manera frontal el crimen organizado.

Es de importancia llevar a cabo la profesionalización de agentes del ministerio público, policías, peritos y personal administrativo, deberán apoyarse los programas existentes y establecer otros, así como la mejora de salarios, las condiciones de seguridad social y la estabilidad en el empleo de estos servidores públicos.

Otro punto importante para reforzar la seguridad es que se impulsará una campaña de comunicación social que dé orientación a todos sobre medidas preventivas, sus derechos en caso de que sean víctimas de un delito y la naturaleza e importancia de las acciones que desempeñan las instituciones encargadas de la seguridad, para ello se exige la participación de algunas instituciones sociales como la familia, la escuela, las empresas, las organizaciones vecinales y comunitarias, así como los medios masivos de comunicación.

Como se podrá observar, lo que se pretende realizar en materia de seguridad pública en este sexenio es profesionalizar a la policía para lograr una eficiencia y una confianza ciudadana hacia los cuerpos de seguridad.

Dentro de lo que es la modernización del estado, la SGP y V cambió su nombre por el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cual se conformó por dos áreas, la policía vial y la preventiva, dentro de esta segunda se encuentra la llamada policía Transformación 2000 (T-2000). Este programa inicia en el sexenio de Carlos Salinas, durante la regencia de Manuel Aguilera Gómez y arranca en octubre de 1994; para su Coordinador General Enrique Pérez Casas, "el proyecto pretende unificar todos los cuerpos de policía que actualmente trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública" (Moreno, Daniel. "Policía del 2000". Enfoque Supl. de Reforma, México, D.F. 6 de agosto de 1995)

Este proyecto surge inspirado en los modelos chileno y canadiense, concebido como un plan para la formación de nuevos policías, los cuales se pretende sean ajenos a la corrupción e ineficiencia.

Como principal meta a alcanzar por Transformación 2000, se proponía sustituir a los 26 mil elementos de la SSP por nuevo reclutas, con ello se renovarían al total de los efectivos en el año 2000, pues cada año egresan 4400 nuevos policías. Los policías tendrían un curso inicial del cuatro meses pero se agregarían cursos superiores que les permitirían cursar una licenciatura en Seguridad Pública y en base al número de cursos se otorgarían los ascensos y las becas para continuar los estudios. Para reforzar a T-2000 se harían reformas al sistema legal, como por ejemplo una reforma a la Constitución para poder sustentar legalmente la nueva organización de la policía y elaborar una ley de orden público.

Sin embargo, a un año de haberse puesto en marcha este proyecto, los resultados obtenidos son considerados como un fracaso, atribuido principalmente al cambio sexenal, entre otros, las siguientes cifras ilustran mejor esta afirmación, “de catorce minicuarteles que debieron constituirse en su primer año de vida, sólo hay tres; de diez unidades que debían estar en funcionamiento para el primero de agosto (1995), existen apenas tres y de estas sólo dos fueron integradas con personal nuevo”(Ibid)

Otros aspectos que demuestran que no se ha cumplido el proyecto T-2000, es que su coordinador, el cual ocupaba oficinas en el Instituto Técnico de Formación Policial fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública dentro de unas oficinas improvisadas, teniendo además una reducción de personal al grado de tener sólo una secretaria y un secretario particular, también se le retiró todo mando operativo. El Coordinador Pérez Casas argumenta la desviación de recursos económicos hacia otros programas y la utilización de nuevos policías para otros cuerpos abandonaron el proyecto de la T-2000, claro ejemplo es que de las últimas 9 generaciones de policías egresados del Instituto, sólo dos se incorporaron a este proyecto, no cumpliéndose con ello los planes originales.

A opinión del Secretario de Seguridad Pública David Garay, dice que formalmente T-2000 si existe “fue un proyecto y ahora es un programa. No es otra policía, es la misma policía preventiva que ahora está en una etapa cuyos resultados habremos de evaluar. Afortunadamente ha nacido en condiciones que la policía preventiva no tuvo, como el equipamiento, los recintos, las armas y las patrullas”(Ibid)

Una última opinión sobre este proyecto es que a pesar de las intenciones iniciales, a los policías los ha alcanzado un clima de corrupción, ineficacia y en algunos casos incluso, la complicidad con delincuentes. Sin embargo no por ello el programa debe desaparecer, mas bien deben de eliminarse de él acciones como las anteriormente mencionadas.

Otro aspecto a considerar durante este gobierno es el que los Comités Delegacionales de Seguridad Pública, los cuales fueron constituidos en 1989 fueron reactivados en sus acciones debido a que su funcionamiento había quedado únicamente en el papel y no precisamente en la práctica, como más adelante se mencionará. Fue gracias a la nueva Comisión de Seguridad Pública de la ARDF conformada ahora por representantes de diversos partidos y que quedó bajo la presidencia de Pedro Peñaloza que se ha hecho un seguimiento más detallado de las actividades de los Comités Delegacionales de Seguridad Pública, haciéndose obligatoria la elaboración del Plan de Seguridad Pública a nivel delegacional en el caso de que no existiese.

Ahora bien, ante el descontento ciudadano por los altos índices delictivos y ante la demanda por instrumentar acciones que los disminuyeran, el DDF y la SSP, instrumentaron una serie de medidas que a decir de tales dependencias fueron propuestas por los Comités Delegacionales, pero que sin embargo una vez dadas a conocer, no obtuvieron la aprobación ciudadana, estas medidas fueron:

Operativo Alerta. Que pondría especial atención en el robo a los comercios.

Operativo Nocturno. Que implica la revisión de los conductores y acompañantes que muestren actitudes sospechosas, así como para verificar la situación legal de los vehículos y la posible posesión ilegal de armas.

Código Águila. Hay que considerar que este operativo ya se había venido instrumentando y consiste en mantener un contacto constante entre los presidentes de las colonias y los policías asignados a estas.

Protección Obrera. Está destinada a la protección de trabajadores en las zonas fabriles de la ciudad, los policías estarían ubicados en estas zonas principalmente los días de pago.

Vigilancia especial en zonas de alta incidencia de robos de autos y autopartes.

Operativo Escarlata. Se encarga de la revisión de deshuesaderos y tianguis de autopartes.

RIMA. Llamado de reacción inmediata y máxima alerta, deberá prevenir, investigar y esclarecer delitos que perturben la paz, tranquilidad y orden público.

Operativo Contacto. Está vinculado a la búsqueda de mercancía robada, sobre todo de línea blanca y electrónica en mercados y tianguis populares.

Operativo Omega. Tiene que ver con el contrabando de vehículos de procedencia extranjera.

Operativo Tauro. Investiga delitos contra la salud.

Operativo Marte. Tiene como objetivo combatir la portación ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, este controvertido plan presentó una serie de inconformidades por parte de la ciudadanía y la Asamblea de Representantes, así como de órganos de representación de participación ciudadana, referente a la violación de derechos humanos y la inconstitucionalidad del mismo; por tanto, muchos de los puntos de este plan tuvieron que ser suspendidos, principalmente uno que estaba asociado con la formación de una especie de retenes policiacos y el referente a la detención de sospechosos.

En el capítulo 3 se explica lo referente a la seguridad pública en Azcapotzalco, dando a conocer la estructura con que se cuenta para atacar la problemática de la inseguridad, así como los resultados obtenidos en nuestra encuesta tomando como base de análisis la segunda hipótesis.

CAPITULO 3

SEGURIDAD PUBLICA EN AZCAPOTZALCO

Nos proponemos ahora analizar la cuestión de la seguridad pública en relación con la participación vecinal en lo que fue nuestra zona de estudio, es decir, la delegación Azcapotzalco.

3.1

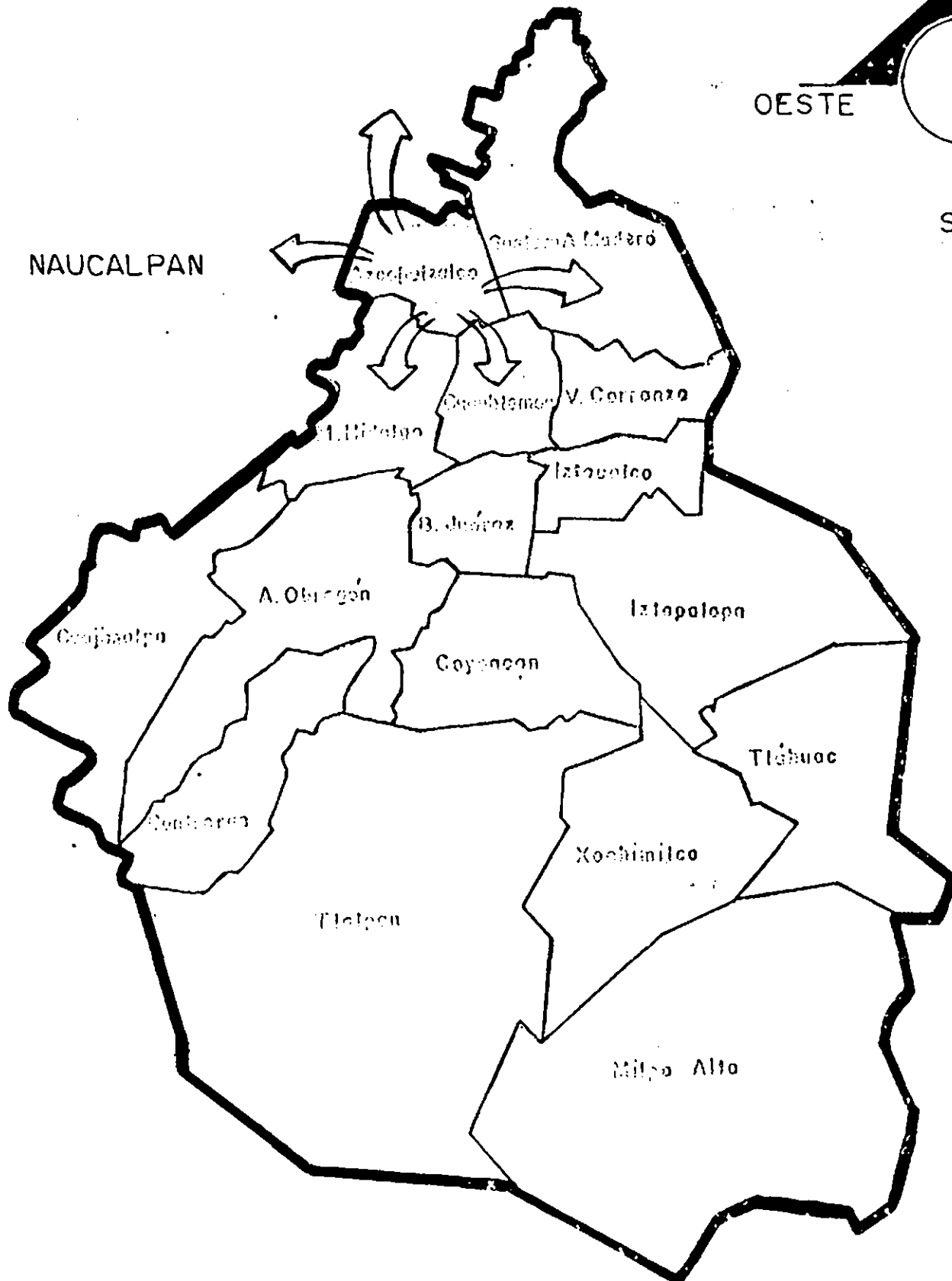
UBICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

La Delegación se encuentra ubicada en el norte de la Ciudad de México sobre una superficie de 33.5Km², colindando con las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, asimismo limita con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. De acuerdo con el Censo de 1990 se conoce que esta delegación cuenta con una población de 479 910 habitantes, los cuales se encuentran asentados en 79 colonias y 32 unidades habitacionales y una población flotante de 160 000 personas. (Ver mapa A)

Azcapotzalco genera el porcentaje más importante de empleos, ya que cuenta con el 50% de toda la industria del Distrito Federal, igualmente debido a que es límite entre éste y los municipios más importantes del Estado de México se genera en su interior un importante tránsito de personas que por ahí cruzan para dirigirse a sus trabajos o centros educativos que se encuentran en los lugares contiguos a dicha delegación. Además genera el porcentaje más alto del Producto Interno Bruto de la Capital.

El problema de la inseguridad que se ha venido presentando en el país, sobre todo en la ciudad de México desde principios de la década pasada y hasta nuestros días, también se hizo presente en Azcapotzalco, aunque si bien no con las misma intensidad que en otras delegaciones el problema sí estuvo latente, esto se observa a partir de los datos presentados desde 1993 hasta el primer semestre de 1995.

Se decidió tomar como punto de referencia este lapso de tiempo (1993-1995) por considerar que es el periodo en el que se agudizan más los



índices delictivos, por ello la seguridad pública es un problema de primer orden que debía alcanzar soluciones prontas.

Durante 1993 los índices delictivos se comportaron tal y como se muestra en el cuadro número 1 ahí se destacan las tres delegaciones con mayor incidencia, siendo éstas la Cuauhtémoc, la Gustavo A. Madero y Benito Juárez respectivamente, para este año la delegación Azcapotzalco ocupó el octavo lugar entre las 16 delegaciones, aunque no por ello se dejó sentir malestar ciudadano por los diversos delitos registrados.

CUADRO 1
POSIBLES DELITOS REGISTRADOS SEGUN LA MODALIDAD
DEL ROBO POR LUGAR DE REGISTRO. TOTAL DE 1993.

Delegación Política	CUAUHTE-MOC	GUSTAVO A. MADERO	BENITO JUAREZ	AZCAPOTZALCO
Chofer repartidor	666	1200	237	442
Negocio	3055	1231	1412	677
Automóvil	3286	2109	2528	1305
Casa Habitación	656	673	453	286
Transeúnte	3173	1757	1091	558
Acces. Automoviles	283	160	156	228
Placas de Auto	40	7	9	27
Aparat. Electricos	38	2	6	26
Documentos	102	27	18	90
Alhajas	6	2	4	3
Dinero	85	35	38	112
Varios	595	140	41	256
Tentativa de robo	113	105	55	48
Total	12098	7448	6048	4058

NOTA: La Delegación Azcapotzalco ocupó el octavo lugar en índice delictivo.

FUENTE: PGJDF

Como se podrá observar el delito que se presentó en mayor cantidad en las delegaciones fue el referente al robo de automóviles con 3286 casos en la delegación Cuauhtémoc, 2109 casos en la delegación Gustavo A. Madero y 2528 casos en la delegación Benito Juárez.

Para el caso de la delegación que nos interesa, es decir, Azcapotzalco, el robo de automóviles también fue el más frecuente con 1305 casos. El delito que se presentó con menor cantidad fue el robo de alhajas como se ilustra en el mismo cuadro.

En 1994 el comportamiento de la delincuencia se presenta en el cuadro 2. La delegación Cuauhtémoc siguió ocupando el primer lugar, para entonces la delegación Iztapalapa ocupó el sitio número dos, en tanto que la Benito Juárez siguió en el tercer lugar.

CUADRO 2

POSIBLES DELITOS REGISTRADOS SEGUN LA MODALIDAD DEL ROBO POR LUGAR DE REGISTRO. TOTAL DE 1994

Delegación Poliica	CUAUHTE- MOC	IZTAPALAPA	BENITO JUAREZ	AZCAPOTZAL CO
Chofer	1494	1586	405	867
Repartidor				
Negocio	3724	1543	1980	790
Automóvil	4369	3555	4259	1881
Casa Habitación	682	639	483	324
Transeunte	3907	1792	691	614
Acces. Automóvil	257	165	190	241
Placas de Autos	38	24	49	54
Aparat. Electricos	7	21	1	44
Documentos	55	57	28	120
Alhajas	4	1	0	18
Dinero	16	19	3	155
Varios	962	240	182	324
Tentativa de Robo	128	80	56	90
TOTAL	15643	9722	9227	5552

NOTA: La Delegación Azcapotzalco ocupó el octavo lugar en índice delictivo.

FUENTE: PGJDF

Es destacable el hecho de que la delegación estudiada se mantuvo en el octavo sitio en cuanto al índice delictivo dándose con ello cierta estabilidad. Analizando este cuadro se puede apreciar que el delito que se siguió presentando con mayor frecuencia fue el robo de automóviles, pero dándose los incrementos siguientes.

Delegación Cuauhtemoc	1083 robos
Delegación Benito Juárez	1731 robos
Delegación Azcapotzalco	576 robos

El robo de alhajas se mantuvo con el menor índice tal y como se aprecia en el cuadro.

Para 1995 y de acuerdo a un estudio criminológico de la Dirección General de Información y Política Criminal de la PGJDF, en Azcapotzalco ocurrieron durante los primeros seis meses de 1995 un total de 2695 delitos violentos siendo el principal el delito de Robo de Auto con 637 casos, seguido del Robo a Repartidores con 626 denuncias, el Robo a Transeúntes con 570 y las Lesiones Intencionales que sumaron 532. Asimismo, el Robo a Negocios registró 255 averiguaciones previas, 31 por Homicidios Intencionales, 23 por Robo a Casa Habitación con violencia y 21 casos de Violación.

Cabe hacer mención que del total de delitos cometidos en esta Delegación un 46% se concentraron sólo en diez colonias como son: Nueva Santa María, Industrial Vallejo, Clavería, El Rosario, Pro-Hogar, Villa Azcapotzalco, Unidad Habitacional El Rosario, Ampliación San Pedro Xalpa, Tlatilco y Reynosa Tamaulipas.

Por si esto fuera poco, se pudo conocer -de acuerdo con un informe presentado por la PGJDF a la Cámara de Diputados- que “durante el primer semestre de 1995 se cometieron en la Ciudad de México 43157 delitos violentos, de los cuales sólo 22873 se concentraron en 175 de las 1852 colonias que conforman la capital”(Ciudad y Metrópoli, 1995: 1B REFORMA)

Esto indica que de este total de delitos, más de 22 mil se concentraron en el 9% del territorio del Distrito Federal, siendo las colonias más peligrosas, Centro, Del Valle, Roma, Agrícola Oriental, Anáhuac, Guerrero, Doctores, Santa María la Ribera, San Juan de Aragón, Morelos y Polanco. Según la PGJDF durante el primer semestre de este año se registró un promedio diario de 569 delitos que significó un incremento del 18% con relación a 1994 que fué de 442 delitos diarios.

Esto vino a demostrar que la delincuencia y la inseguridad que afectó a la mayor parte de la Ciudad de México también se hizo presente de manera notoria en Azcapotzalco.

Casi al finalizar la redacción de la Tesina pudimos obtener los datos de delitos totales en el Distrito Federal durante 1995, los cuales mostramos a continuación en comparación con los de 1994.

CUADRO 3

DISTRITO FEDERAL
INDICE DELICTIVO POR DELEGACION POLITICA

DELEGACION	1994		1995	
	Promedio Diario	Total	Promedio Diario	Total
CUAUHTEMOC	73.64	26,877	94.53	34,502
IZTAPALAPA	52.25	19,071	83.84	30,600
GUSTAVO A. MADERO	58.12	21,215	77.01	28,107
BENITO JUAREZ	41.73	15,233	56.46	20,609
MIGUEL HIDALGO	40.47	14,771	52.00	18,980
VENUSTIANO CARRANZA	34.96	12,759	43.56	15,900
COYOACAN	30.75	11,222	42.15	15,384
AZCAPOTZALCO	26.68	9,737	30.79	11,240
ALVARO OBREGON	23.04	8,410	29.77	10,866
TLALPAN	22.48	8,207	29.45	10,750
IZTACALCO	16.44	6,000	25.56	9,329
XOCHIMILCO	7.54	2,753	11.59	4,231
TLAHUAC	5.97	2,179	9.53	3,480
MAGDALENA CONTRERAS	4.06	1,481	6.04	2,204
CUAJIMALPA	3.08	1,125	4.67	1,703
MILPA ALTA	1.25	456	1.96	714
TOTAL	442.46	161,496	598.90	218,559

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, Lunes 11 de marzo de 1996.

FORMAS DE ORGANIZACION PARA LA PROCURACION DE SEGURIDAD PUBLICA EN AZCAPOTZALCO

Por la situación ya descrita el gobierno capitalino tuvo que dar respuesta a la demanda de seguridad, en el caso de la Delegación Azcapotzalco esta se organizó de la siguiente manera para la atención de la demanda: para atender los problemas de seguridad pública y procuración de justicia respectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta en Azcapotzalco con 384 elementos, así como 90 patrullas y 360 armas, a su vez, se encuentran divididos en cuatro sectores.

Por su parte, la Delegación Regional de Justicia del Distrito Federal en Azcapotzalco, cuenta con 65 agentes de la policía judicial, 28 patrullas y cuatro agencias investigadoras del Ministerio Público, así como con dos mesas de trámite y oficinas de servicios periciales, servicios a la comunidad y de determinaciones.

En 1989 el Regente de la Ciudad estableció que era necesario que en cada una de las Delegaciones se constituyera un Comité de Seguridad Pública, sin embargo, en Azcapotzalco no se constituyó y lo único que se implementó fueron los operativos de seguridad pública vigentes en el Distrito Federal, ya que no había un programa bien establecido como en otras Delegaciones.

Es importante decir que con motivo del cambio de administración en el gobierno, ocurrido el primero de diciembre de 1994, también se suscitaron movimientos al interior de cada una de las Delegaciones del Distrito Federal, vía el cambio de delegados, los cuales fueron aprobados por la ARDF. Estos nuevos delegados, junto con la nueva Comisión de Seguridad Pública de la ARDF, presidida por el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática Pedro Peñaloza, continuaron con una labor decisiva para alcanzar un mayor compromiso en materia de seguridad entre la propia Asamblea, las autoridades encargadas de impartir justicia y los ciudadanos. Esto se demuestra mediante una de las primeras acciones que consistió en realizar reuniones mensuales entre el delegado, los jefes de policía de cada sector, un representante de la Policía Judicial y los presidentes de colonia de cada una de las delegaciones. Cabe hacer mención que nosotros asistimos a la primera de estas reuniones en la Delegación Azcapotzalco para enterarnos de la problemática de la inseguridad en este

lugar, informándonos de los diferentes problemas que los aquejan, como es la falta de vigilancia en calles, parques, avenidas y comercios, así como robos a transeúntes y casas-habitación, al igual que la denuncia de bandas organizadas que asaltaban ciertos lugares, principalmente la Unidad Habitacional conocida como Las Trancas.

También se pugnó por que se integraran los Comités Delegacionales, que como ya se mencionó, no fueron puestos en práctica por la anterior administración.

Para marzo de 1995 se cuenta en Azcapotzalco con un Programa Delegacional de Seguridad Pública en donde se planteaban entre sus principales objetivos:

- 1.- La disminución de los índices de criminalidad.
- 2.- Crear una nueva cultura de seguridad pública.
- 3.- La generación y fortalecimiento de la confianza, además de la credibilidad de la población en las autoridades encargadas de impartir justicia.

Entre algunas de las estrategias que se tienen para lograr lo anterior se encuentran las siguientes:

- a) Desarrollar y actualizar los instrumentos administrativos necesarios
- b) Incrementar la participación ciudadana y vecinal en esta materia
- c) Instrumentar los mecanismos de coordinación entre las dependencias que participan
- d) Otorgar una atención fundamental a la prevención del delito y a la cultura en materia de seguridad pública

Después de tener conocimiento de un Programa de Seguridad en la Delegación Azcapotzalco se realizó una entrevista a los representantes vecinales de las áreas estudiadas para saber que tanto había cambiado la situación de inseguridad con la instalación de éste, llegando a mencionarse lo siguiente: la presidenta de la Colonia Hogar y Seguridad, Josefina César dijo que siguen aumentando los índices delictivos, ya que continúan dándose los robos a casa y departamentos y que por tanto cada vez más hogares instalaban alarmas particulares. Para la presidenta de los Sectores 3 y 4 de la Unidad Habitacional, no hubo grandes cambios con el programa, por lo cual se tuvo que formar un grupo especial de seguridad pública con jóvenes ya que el único operativo que se dió con este nuevo programa fué el de la

Policía Montada, sin embargo este únicamente se efectuó en el mes de abril de 1995.

Se puede decir entonces que los avances realizados en la delegación a la que nos estamos refiriendo se han dado con la intención de dar una mejor seguridad pública a la sociedad y también se ha mostrado un mayor interés en la promoción de la participación de la ciudadanía en la supervisión y elaboración de los operativos que se implementen.

Para el caso de la mencionada delegación tenemos que los órganos de representación ciudadana son: la H. Junta de Vecinos y el Comité Delegacional de Seguridad Pública. En el caso de la junta de vecinos existe una comisión de seguridad pública, la cual según datos recabados mediante una entrevista a la Dra. Guadalupe Català, miembro de esta misma, está conformada por 15 elementos, todos ellos vecinos de esta delegación y que generalmente ocupan el cargo de presidentes de sus respectivas colonias. Dichos elementos se eligen a través de un riguroso sistema de selección e imparcialidad, es decir, deben cumplir con los lineamientos establecidos para ello. No existe un periodo de gestión debidamente reglamentado para esta comisión, pero generalmente su periodo de administración coincide con el de la H. Junta de Vecinos.

Las funciones que lleva a cabo esta Comisión de Seguridad Pública de la H. Junta de Vecinos son las de recibir quejas y demandas acerca de los problemas de inseguridad de la delegación, discutirlos y a través de su relación con el Comité Delegacional darles solución a los mismos por medio de la implementación de operativos. Hay que hacer hincapié en que dicha comisión no tiene poder de decisión, y su labor se remite por lo tanto a hacer recomendaciones y propuestas de acción.

De la relación existente entre la Comisión y el Comité anteriormente descritos han surgido medidas tendientes a eficientar la acción de los cuerpos policiacos. Por ejemplo, se puso de nueva cuenta en práctica el operativo Policía de Barrio innovándolo con la medida Patrulla por Colonia, esto con la finalidad de que la ciudadanía mantenga un contacto más directo con la policía y que se observe un ambiente de confianza y seguridad entre ambos (“El vínculo con ellos ha propiciado que al vecino no sólo se le vea como una persona a la que se le puede extorsionar, sino como persona con calidad moral para exigir” Guadalupe Català)

También dijo que se mejoraron las condiciones materiales de los inmuebles de policía, los cuales tuvieron una remodelación total, se mejoró

la condición económica de los policías, así como sus prestaciones, dotando de chalecos antibalas y de uniformes, los cuales anteriormente eran comprados por los propios policías.

En esta misma entrevista se informó que se tiene relación con el gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección Jurídica del DDF, la cual provee de reglamentos (Ley Cívica) y publicidad para que se distribuya entre los presidentes de colonia, los cuales se encargan de difundirla entre sus colonos; se llevan a cabo reuniones en las colonias donde existen mayores problemas de seguridad a las cuales asisten representantes del DDF, los jefes de sector de policía, miembros del Comité Delegacional de Seguridad Pública y vecinos de la colonia para exponer sus quejas y denunciar y cuestionar situaciones corruptas.

Producto de estas reuniones se han puesto en marcha algunos operativos (los cuales son parte del Programa de seguridad Pública en el Distrito Federal) tal es el caso de los siguientes: el *Operativo Escuelas*, el cual consiste en instalar una patrulla en la entrada y salida de las escuelas para la protección de los estudiantes; *Operativo Parques*, que implica que una patrulla hace rondines por las noches en los parques; *Operativo Unión*, el cual llevan a cabo conjuntamente la Policía Judicial y la Policía Preventiva para llevar a efecto acciones contra la delincuencia; *Código Águila*, el cual consiste en los rondines de una patrulla por las colonias, al tiempo que se reportan en diferentes horarios ante el presidente de colonia respectiva; *Operativo Mercados*, que consiste en rondas continuas de elementos policiacos para la seguridad de las amas de casa que acuden al mercado en compra de víveres.

Sin embargo, y a pesar de los operativos que se llevan a cabo en la delegación Azcapotzalco, corresponde dar a conocer los resultados que se obtuvieron en la encuesta en relación con dichos programas además de analizar de acuerdo a estos datos nuestra primera hipótesis en la cual se afirma que la ineficiencia de los programas de seguridad pública implementados por el Estado, ha propiciado la inconformidad de la ciudadanía y a que esta busque mecanismos y formas de seguridad que le permitan autoprotegerse.

Debemos tomar en cuenta que resulta difícil la medición de la ineficiencia o la eficacia de los programas de seguridad pública formulados por el Estado debido a que , por un lado, los índices delictivos muestran unos resultados y por el otro existe la opinión y el sentir de la gente. Cabe decir también que existía un programa de Seguridad Pública a nivel de la

Ciudad de México que estipulaba que cada Delegación Política debía contar con un Programa de Seguridad Pública, sin embargo en Azcapotzalco dicho programa no existía.

Así pues, al aplicar la encuesta en nuestra zona de estudio el 82.9% considera que las medidas tomadas por el Estado son ineficientes, un 14.3% opinó que sí han sido eficientes mientras que un 2.9% evitó contestar.

Ahora bien, al cuestionarles acerca de que si las medidas implementadas por el gobierno han permitido disminuir los índices delictivos tenemos en relación con el lugar de la encuesta, los siguientes resultados.

CUADRO 4

¿LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO HAN PERMITIDO DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS?

	SI	NO	NO CONTESTO
COLONIA	3.3%	96.7%	
UNIDAD H.	12.5%	85.0%	2.5%

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac. Marzo 1995.

El cuadro muestra que si bien el 12.5% de personas de la Unidad Habitacional que consideran que han disminuido los delitos no es muy significativo en relación al total, comparándolo con el de la colonia podemos decir que al menos entre las personas encuestadas existe un poco más de confianza entre la gente de la Unidad Habitacional.

La opinión de la gente muestra que los programas que van encaminados a la disminución de la inseguridad y la delincuencia no han cumplido eficazmente con sus objetivos.

Haciendo un análisis comparativo, se observa que hay un gran malestar en ambas zonas por la inseguridad que prevalece, aunque en la Colonia, por las respuestas de los vecinos es más palpable esta situación, de ahí que sea esta zona la que haya manifestado mayor inconformidad, resultando con ello que sea la que implemente más mecanismos, formas de autoprotección, tales como la instalación de un sistema de alarmas, adopción de perros de ataque, alarmas en automóviles, etcétera con la finalidad de prevenir los robos más frecuentes.

Ahora bien, en la Unidad Habitacional los tipos de delitos que se cometen son distintos a los de la colonia, atribuimos esto a que los espacios con que esta cuenta son cerrados o muy estrechos, de fácil operación para los delincuentes y de difícil acceso a las autoridades, lo que hace más factible el robo a transeúntes y de autopartes, por tanto las medidas adoptadas son principalmente: cerrar la puerta de entrada de los edificios, colocar mirillas en las puertas, dobles puertas a cada uno de los departamentos, etcétera.

Si bien las medidas adoptadas por la población no se llevan a cabo en su mayoría a nivel vecinal, podemos mencionar que en ambas zonas se toman medidas de carácter familiar para la prevención del delito tales como llegar temprano al hogar, no portar objetos de valor y no transitar por lugares oscuros. Así al no existir una organización constante entre vecinos, el comportamiento se individualiza, por tanto cada familia se protege por sí misma al no encontrar respuesta satisfactoria ante la situación de inseguridad por parte de las autoridades de la Delegación encargadas de brindar seguridad.

Estos comportamientos individualizados nosotros los consideramos como un cambio de hábitos en la vida cotidiana de las personas, sin embargo, al cuestionarles sobre si las medidas adoptadas han significado cambios en su vida cotidiana los resultados generales fueron:

CUADRO 5

SIGNIFICA CAMBIO DE HABITOS	NO SIGNIFICA CAMBIO DE HABITOS	NO SE APLICA
11.4%	22.9%	65.7%

NOTA: El porcentaje que no se aplica corresponde a las personas que no habían tomado ninguna medida específica.

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac

Vemos entonces que existe un gran enojo entre la población de ambas zonas por la inseguridad que prevalece y que se hace presente con los diversos robos que fueron denunciados al aplicar la encuesta, tales como el asalto a transeúntes, robo de vehículos, a casa habitación, etcétera. También se manifestó que las medidas implementadas por el gobierno no son de la confianza de la población ya que opinan que no han permitido disminuir los

índices delictivos aunado a la opinión de que los cuerpos policiacos son considerados corruptos y faltos de capacitación.

Con este panorama de inconformidad ante la ineficiencia de los programas en ambas zonas los vecinos buscaron mecanismos y formas de seguridad que les permitieran autoprotegerse, tal y como se afirma en nuestra hipótesis. Las medidas más frecuentes en orden de importancia son: llegar temprano al hogar, no transitar por lugares oscuros, no portar objetos de valor, no llevar grandes cantidades de dinero e instalar alarmas en los automóviles; otras medidas menos utilizadas fueron las de instalar sistemas de alarmas en los hogares, enrejado de puertas y ventanas y la utilización de perros de ataque.

CAPITULO 4

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS

Este capítulo tiene por objetivo analizar el concepto de lo que es la participación ciudadana y cómo esta se distingue de la participación política, comunitaria y vecinal, haciendo énfasis en esta última ya que esta definición será de utilidad para entender y complementar el trabajo que estamos desarrollando sobre la participación vecinal en las zonas estudiadas.

4.1

DEFINICION DE LOS DIVERSOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Es importante hacer notar que la participación ciudadana no ha sido siempre concebida desde un igual punto de vista, en algunas ocasiones es conceptualizada como participación popular y usualmente es utilizada como sinónimo entre ésta y la ciudadanía.

De acuerdo con Nuria Cunill en su texto *Participación Ciudadana* (1987) podría definirse la participación como aquella actividad que implica tomar parte en algo, en el caso de la participación ciudadana se entiende que los individuos toman parte en alguna actividad pública.

Tomando en cuenta que la participación ciudadana es un tema muy amplio, es conveniente señalar que no todos los tipos de participación implican una organización formal, entendiéndose por ésta aquella que es organizada y coordinada por el Estado a través de sus diversas instituciones e instancias; también existe aquella organización independiente que se realiza entre vecinos y que es coordinada entre ellos mismos para su propio beneficio y que sobre todo, busca soluciones a corto plazo.

A continuación se darán las definiciones de algunos tipos de participación de acuerdo a Nuria Cunill en el texto antes mencionado:

Participación Social: Esta implica un agrupamiento de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la protección de sus intereses sociales. Es de hacer notar que los individuos no se relacionan con el Estado directamente sino a través de otras instancias como pueden ser las organizaciones no gubernamentales.

Participación Comunitaria: Este tipo de participación guarda una relación con el Estado en el aspecto asistencial de acciones, debido a que estas son ejecutadas por los mismos ciudadanos y están referidas a sus problemas y demandas más inmediatos. Este tipo de participación disminuye en cuanto sus demandas son resueltas al tiempo que tiende a disolverse.

Participación Política: Es aquella que está vinculada con la elaboración de opciones o de decisiones de interés público o sea con las acciones a nivel de gobierno. Dichas acciones pueden tener por objeto las políticas públicas de alcance regional o sectorial.

Participación Vecinal: Es una forma de organización a nivel de zonas habitacionales donde se representan intereses específicos, teniendo como rasgo fundamental el que al vincularse con el Estado tienden más hacia la colaboración. Por otro lado no siempre se relacionan con este mismo ya que actúan de forma independiente para tratar de resolver alguna problemática que afecte a la zona. (Cunill, Nuria. 1991)

Cabe destacar que este tipo de organizaciones pudieron haber tenido en un momento vínculo con el Estado en busca de solución de ciertas demandas, como podría ser la misma seguridad pública, no obteniendo por parte de éste respuestas deseadas, por lo que optan por organizarse de manera independiente creando una serie de mecanismos de autoprotección que les permitan una mayor tranquilidad.

Vistos los conceptos anteriores queda claro que existen diferentes tipos de participación, desde aquella a nivel general, que es la participación social que involucra a toda la sociedad civil, pasando por aquella de nivel medio que está relacionada con un cierto grupo de una comunidad en donde se demandan generalmente servicios básicos, hasta una participación de carácter político, la cual se basa en la elaboración y toma de decisiones de interés público.

Para efectos de nuestra investigación tomamos en cuenta generalmente a la participación vecinal entendida como: una forma de organización entre vecinos de diferentes zonas habitacionales que se reúnen para buscar solución a los diversos problemas que se presentan dentro de dichos lugares. Esta participación se da tanto de manera independiente como en coordinación con otros órganos delegacionales. Por tanto creemos que la participación que se da en torno a la seguridad pública tiene una doble connotación, por un lado, cuando se trata a nivel de colonias consideramos que hay una participación meramente vecinal, ya que esta es de carácter informal y muchas veces ni siquiera llega a conformarse como una organización, ya que las respuestas que se dan contra la inseguridad son a

nivel de casa o departamento, es decir a nivel familiar como por ejemplo, la instalación de alarmas, enrejado de puertas y ventanas, etcétera, cabe destacar que dichas medidas son tomadas previo acuerdo aunque esto no sucede siempre así, ya que en algunos casos se toman medidas sin consultar a ningún vecino.

Por otra parte, cuando se da una participación a nivel de las Asociaciones o Juntas de Vecinos la participación adquiere una connotación formal y de carácter institucional, ya que se trabaja en coordinación con la Delegación para la atención y gestión de diversos requerimientos de la población según sea el problema. Este nivel de participación se plantea en el apartado siguiente.

LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO FORMA DE DEMOCRATIZAR AL ESTADO

Una vez mencionados los conceptos anteriores, de manera general podemos decir que en América Latina la lucha por conquistar espacios de participación social se ha vinculado con la necesidad de democratizar el Estado, es por ello que se ha llegado a institucionalizar la participación ciudadana desde una perspectiva oficial con la finalidad de que exista una mayor intervención de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Este impulso a la participación proveniente de las misma sociedad civil podría ser entendida como una lucha por el poder entre los ciudadanos y los aparatos gubernamentales. La participación ciudadana fue haciéndose presente como un problema en los regimenes capitalistas avanzados asociada a la crisis de representatividad en los gobiernos liberales a partir de la década de los sesenta, en la cual surgieron numerosos movimientos sociales con gran fuerza que propiciaron nuevas formas de hacer política.

A raíz de estos movimientos se pone énfasis en la democratización de los sistemas políticos y burocráticos. Esta democratización estuvo caracterizada por una mayor intervención de las asambleas representativas de menor escala, mayor atención a las necesidades y demandas individuales y colectivas y una reorganización de los aparatos administrativos.

Así, la participación ciudadana es considerada como una alternativa para crear consenso y para contener la discrecionalidad de la burocracia la cual se manifestó con la crisis de eficacia del Estado, sobre todo después de los años setenta en que el Estado de Bienestar entra en una crisis y comienza a descargar sobre la sociedad civil acciones y responsabilidades públicas. Las acciones gubernamentales provocan que la participación ciudadana sea un medio para involucrar a los ciudadanos en la producción y muchas veces en el financiamiento de ciertos servicios.

También puede decirse que la participación ciudadana en los regimenes democráticos aparece como un complemento necesario de ellos, es por eso que se asocia la participación ciudadana como una forma de ampliar la democracia y justificar su existencia.

Además la democratización implica acercar a la sociedad la posibilidad de participación en su propio beneficio provocando al mismo tiempo que lo estatal se convierta en público.

Nuria Cunill afirma que la participación ciudadana es una plataforma que permite construir consenso y legitimar desigualdades, ello a nuestra forma de pensar contribuye a ampliar el ámbito democrático, pues por un lado se lleva a la sociedad civil la posibilidad de participación, y por otro, mediante ésta pueden discreparse las diferencias surgidas de las distintas forma de pensar de la sociedad.

En México, los ciudadanos del Distrito Federal, de alguna forma han actuado para abrir cauces de representatividad política logrando la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, también se ha llevado esta participación a órdenes específicos, tal es el caso de las Comisiones de Seguridad Pública o Protección Civil en cada una de las delegaciones, otro ejemplo es el de las Comisiones de Derechos Humanos, todo ello para tenerlos más cercanos a la población y posibilitar su participación, disminuyendo con ello la presión social que pudiera ejercerse y también para ir delimitando y aminorando la participación del Estado, que en algún tiempo fue excesivamente interventor.

Las estrategias estatales hoy día, consisten en descargar en la sociedad civil tareas que anteriormente correspondían al Estado a través de la participación ciudadana.

En cuestión de seguridad pública, las propuestas principales en este rubro surgen del Plan Nacional de Desarrollo en el cual la participación social fue indispensable para su elaboración a través de la realización de Foros de Consulta Popular.

Se ha mostrado que la incapacidad del Estado para hacer frente a la creciente ola de delincuencia y en general de violencia urbana mostrada a lo largo de los dos últimos sexenios, lleva a la necesidad de la participación social para abatir el problema. Las formas como esto se oficializa en el Distrito Federal es a través de los Comités de Seguridad Pública que se integran tanto por representantes de la junta de vecinos como por la autoridades políticas y policiales delegacionales.

Podemos decir que la participación ciudadana da origen a las propuestas en materia de seguridad pública no dejando de lado las medidas de por las autoridades como respuesta a las estadísticas de índices

delictivos, posteriormente cuando estas propuestas son convertidas en ordenamientos, los órganos encargados de llevar a cabo las acciones son, por un lado las autoridades tales como la PGR, la PGJDF y la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, por otro lado otras acciones son ejecutadas por la comisión de seguridad pública de cada una de las delegaciones políticas, y la comisión de seguridad pública de la Junta de Vecinos, éstas últimas muestra de una delegación a los ciudadanos de responsabilidades de actuación en propio beneficio pues se apoyará la seguridad en las zonas de residencia de los ciudadanos. Esta última es muestra de cómo los ciudadanos adquieren responsabilidades para actuar en su propio beneficio, con esto se apoya a las autoridades en la procuración de seguridad en las zonas de residencia de los ciudadanos.

Por otro lado los órganos mencionados para la impartición y procuración de justicia así como los de participación ciudadana podrían ser muestra de cierta democratización al interior de un órgano estatal por lo menos en términos formales, ya que se va delegando en la sociedad civil cierta intervención en la toma de decisiones, esto se hace evidente desde el momento en que los órganos encargados de impartir justicia toman en cuenta las opiniones de la ciudadanía por medio de sus órganos representativos. Además la ciudadanía puede hacer en algunas ocasiones recomendaciones y llevar a cabo un seguimiento de los programas elaborados por el Estado en materia de seguridad.

Con esto se hace evidente que la democratización del estado se observa en que la sociedad civil puede intervenir. Claro ejemplo de esto es el hecho de que durante la administración del Carlos Salinas, en donde como ya se mencionó se crearon los comités Delegacionales de Seguridad Pública, con la supuesta finalidad de democratizar, abrir espacios donde se determinen acciones conjuntas y sobre todo diera legitimación, sin embargo estos no fueron puestos en práctica según lo informado por la actual comisión de seguridad pública de la Delegación Azcapotzalco.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar acerca de que la participación ciudadana eficientaría las acciones llevadas a cabo, pudimos observar en nuestro trabajo de campo que los vecinos no ligados a estos órganos de representación muestran desinterés por organizarse de forma independiente para salvaguardar sus intereses afirmando que estas tareas corresponden al Estado. Se resalta con ello que en realidad la participación entre vecinos existe aunque no de manera general y en algunos casos solamente se toman medidas a nivel individual.

Entonces creemos importante considerar que si bien es cierto que el Estado ha permitido la creación de órganos que implican la participación social con ello haciendo alarde de creación de órganos democráticos, también es necesario mencionar que la participación o no en ellos se deja a consideración de los ciudadanos, sin embargo hay apatía por organizarse, y sólo individualmente se toman medidas para tener una mayor seguridad.

Cunnill menciona indispensable que ante la ineficiencia de los órganos generales de gobierno es necesario tener un control pluralizado de los distintos niveles y sectores, por ello promueve la organización social del pueblo obteniendo con ello también el fortalecimiento de la sociedad civil y una realización de la política.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA

En el caso específico de México, en la década de los ochenta se hace presente en el discurso político la necesidad de otorgar una mayor importancia a la participación social, la cual estuvo enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y donde ocupó un capítulo especial en este rubro. Específicamente en las fases de instrumentación y ejecución del plan señalando algunas formas de incorporación de la comunidad en los distintos ámbitos a que se refiere el Plan, destacando que este había sido concebido a través de la participación social vía la consulta realizada durante la campaña presidencial del candidato Miguel de la Madrid Hurtado y los Foros de Consulta Popular.

Continuando con el tema del impulso a la participación social, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, dentro del capítulo referente a la Ampliación de la Vida Democrática, se destacaban cuatro ejes que conformaban la estrategia del plan, resumiéndose en que existiría una mayor apertura y ampliación de canales para la participación ciudadana dentro de todos los ámbitos de la vida nacional.

Las cuatro líneas de estrategia en el marco del acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática eran:

1. La preservación del estado de derecho y la seguridad nacional.
2. El perfeccionamiento de los procesos electorales y la ampliación de la participación política.
3. La modernización del ejercicio de la autoridad mediante el fortalecimiento de la división de poderes, de la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas y de la autonomía de los ámbitos de gobierno con la participación social en el diseño y ejecución de las acciones.
4. El impulso a la concertación con las organizaciones sociales en la conducción del desarrollo.

De esta forma las acciones de gobierno enmarcadas dentro de los planes de desarrollo tienden a asumir de manera creciente a la participación ciudadana como un medio para lograr el involucramiento directo de los ciudadanos, ya sea en la producción o en la gerencia, y hasta en el financiamiento de ciertos servicios. De esta manera el Estado deja recaer

sobre la sociedad civil ciertas acciones que anteriormente realizaba él mismo para la dotación de servicios, tal es el caso en México del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual estuvo dirigido en un principio por la Secretaría de Programación y Presupuesto y posteriormente por la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Solidaridad.

Dicho programa se dirigió a atender las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos y a la realización de obras de infraestructura necesaria para alcanzar un mejor trabajo productivo basado en cuatro principios resumidos de la siguiente manera:

- a) El estricto respeto a las comunidades y sus decisiones.
- b) La participación organizada de estas en la realización de obras en su propio beneficio.
- c) La responsabilidad compartida entre comunidades y gobierno en la ejecución de los programas.
- d) La transparencia en el uso de los recursos.

Para lograr estos objetivos se dio paso a la creación de Comités de Solidaridad cuya integración se pretendía basar según las formas de participación de la comunidad. Dichos comités se componían de un presidente, un secretario y los promotores de desarrollo que los propios grupos sociales decidían. Cabe destacar que este programa a la vez que estimulaba la participación colectiva dentro de su comunidad procuraba resolver problemas de bienestar social e inmediato, por ejemplo, agua, luz, drenaje y pavimentación de calles.

Ya en el actual gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el Plan Nacional de Desarrollo, dado a conocer en Mayo de 1995 dentro del capítulo correspondiente al desarrollo democrático se incluye un apartado relacionado a una más intensa participación social y el fortalecimiento de la representación ciudadana. En este capítulo se enfatiza la presencia de los ciudadanos en causas y proyectos sociales y cívicos y en su mayor voluntad de participación en los asuntos públicos, lo que conllevará a una expansión de la vida pública.

Se habla de una multiplicación de los espacios de participación ciudadana hasta el grado en que muchos asuntos de interés público se han ido convirtiendo en compromiso entre gobierno y las organizaciones de la sociedad mostrándose el espíritu de colaboración y corresponsabilidad de ambos.

También en este inciso se pone especial atención en la necesidad de crear mecanismos de interlocución gubernamental permanente para tomar en cuenta a las organizaciones sociales y conocer sus opiniones sobre los problemas existentes y la forma de solucionarlos.

Otro apartado dentro de este Plan fue el referente a la participación social y cultura política, donde se le da importancia a la participación ciudadana como un modo de desarrollo político ya que constituye nuevas formas de acción que prestan atención a los asuntos públicos. La participación social organizada constituye un aspecto fundamental en la toma de decisiones. La sociedad y las organizaciones deben de participar en la “formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos”.

Este Plan también enfatiza que a medida en que se incorpora el esfuerzo colectivo y la crítica social las acciones gubernamentales serán más eficaces. También se estima conveniente promover la creación de consejos consultivos a nivel municipal, estatal y federal, en la que participarán miembros de representatividad social.

A lo largo de este capítulo se ha podido observar que la participación ciudadana es un fenómeno relativamente nuevo en México en donde se hace patente la intervención de los individuos en actividades públicas con la finalidad de que sean cumplidas sus demandas sociales. Para tal efecto se han creado planes y programas para promover la participación ciudadana aunque como ya se dijo en muchas ocasiones esta organización se da de forma independiente a los órganos gubernamentales.

Dichos órganos se han constituido también como parte de la administración pública para la atención de la participación ciudadana. Los órganos consultivos asumen la forma de consejos, comisiones o comités. Estos últimos por lo general tienen como misión general la asesoría y son temporales, pues se refiere a una actividad determinada -tal es el caso de los llamados Comités de Solidaridad- por otro lado algunos comités se constituyen como cuerpos consultivos permanentes como podría ser el llamado Instituto Nacional de Solidaridad.

En el caso del Distrito Federal existe un órgano auxiliar de la administración y gobierno conocido como el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, conformado por los presidentes de la junta de vecinos de cada una de las delegaciones. Para el año de 1987 aparecían como cuerpos

representativos de la ciudad con las facultades de opinar, consultar, denunciar e inspeccionar los actos administrativos del gobierno y de los servicios especiales. Así, los Órganos de Participación Ciudadana en el Distrito Federal quedan de la siguiente manera:

Consejo Consultivo: Integrado por los presidentes de las juntas de vecinos. Órgano colegiado de consulta del Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Junta de Vecinos: Una por cada delegación política, está formada por los miembros directivos de las asociaciones de residentes. La mesa directiva está formada por un presidente, un secretario y tres vocales.

Asociación de Residentes: Formada por los jefes de los comités de manzana en cada colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional. Mesa directiva: un presidente, un secretario y tres vocales.

Comités de Manzana: Constituidos por los vecinos de una manzana, un secretario y tres vocales electos por votación.

Estos órganos de participación son los que hacen evidente las nuevas formas de participación ciudadana desde la administración pública. Cabe hacer notar que dichos órganos creados tienen como antecedente a la participación ciudadana tan espontánea que se suscitó a raíz de los sismos de 1985.

También en la entrevista a la Comisión de Seguridad Pública de la Junta de Vecinos de Azcapotzalco se nos comentó que en la mayoría de las colonias de la delegación Azcapotzalco la gente no se organiza para enfrentar el problema de la inseguridad, sólo en el caso de la colonia La Preciosa, los comerciantes formaron una asociación para tomar medidas para combatir este problema, el cual se manifestaba de manera abierta con un alto índice de asaltos.

Al cuestionarle a la Dra. Guadalupe Catalá sobre la colonia Hogar y Seguridad, nos dijo que esta ocupaba uno de los primeros lugares en delincuencia; hay que considerar que anteriormente dicha colonia era parte de la colonia Nueva Santa María, la que según datos recabados en el periódico *Reforma* del martes 22 de agosto de 1995, era la más afectada en materia de delincuencia en el primer semestre del año, por lo tanto la población de esta zona asocia la delincuencia ocurrida en la colonia Nueva Santa María como parte de ella misma.

A pesar de lo que anteriormente se dijo, hay que especificar que no por ello la Colonia Hogar y Seguridad deja de ser afectada, ya que mantiene

un alto índice delictivo, sin embargo esto no ha motivado a los residentes a organizarse y tratar de combatir el problema. Consideramos que probablemente influya el espacio físico, ya que siendo en su mayoría casas unifamiliares esto hace que la comunicación sea menor entre calle y calle, trayendo consigo una actitud individualizada al momento de tomar una decisión para instrumentar alguna medida de seguridad.

Por otro lado, para la presidenta de dicha colonia, Josefina Cèsar, sí se habían organizado a nivel vecinal para tomar medidas en contra de la delincuencia, pero debe hacerse hincapié en que ésta era una organización temporal que respondía únicamente a problemas inmediatos de inseguridad y que tendía a disolverse cuando era solucionado el problema, aunque a veces esta solución provenía de la delegación y en algunos otros casos por cuenta propia, como en el caso de la contratación de vigilancia privada o en la compra de alarmas.

En el caso de la Unidad Habitacional Cuitláhuac (sectores 3 y 4) se nos informó que tampoco existía una organización formal entre vecinos a pesar de que se contaba con una representante vecinal, la cual trabajaba en coordinación con la delegación, la señora Irma Saravide era la única que mostraba interés real por discutir el tema de la inseguridad. Finalmente mediante esta entrevista se logró tener una información más completa acerca del problema de la inseguridad en Azcapotzalco.

Sin embargo es importante resaltar que de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de caso con relación a las formas de organización que se llevan a cabo en cada una de las zonas estudiadas, tenemos que al cuestionarle a la ciudadanía sobre si llevan a cabo sesiones entre vecinos para discutir el tema de la inseguridad tenemos los siguientes resultados.

CUADRO 6

¿SE LLEVAN A CABO SESIONES ENTRE VECINOS PARA DISCUTIR EL TEMA DE LA INSEGURIDAD?

	SI	NO	NO SABE
COLONIA	50.0%	20.0%	30.0%
UNIDAD	30.0%	57.5%	12.5%

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac

Los datos muestran que un alto porcentaje de los encuestados en la colonia saben sobre las sesiones que se llevan a cabo en cuestión de seguridad a diferencia de la unidad donde la gente está menos informada

sobre las sesiones, ello explica también que el 57.5% de la gente afirmó que no se llevan a cabo sesiones. En la colonia, sin embargo sólo un 20% afirmó que no se llevaban a cabo.

Debemos decir que si bien la participación en las sesiones vecinales no es muy contundente ello no quiere decir que a los vecinos no les interese resolver el problema, en todo caso hay desinformación sobre tales sesiones y también se muestra desinterés o apatía por la organización vecinal, en todo caso las medidas que se adoptan, son como lo hemos dicho ya a nivel familiar.

Una vez vistos los resultados anteriores conviene llevar a cabo un análisis comparativo, primeramente se pudo conocer que hay una organización formal representada por las presidentas de la colonia y de la unidad, sin embargo ésta no es del conocimiento de todos los residentes al igual que las representantes vecinales. Esto es muestra de un desinterés generalizado por participar en la solución de los problemas que aquejan a la comunidad.

Por otro lado, en el caso de la Colonia Hogar y Seguridad existe una mayor disposición para llevar a cabo sesiones entre algunos de los vecinos para tratar el tema de la inseguridad. Esto es debido a que es una de las colonias más afectadas, viviendo con el constante temor de ser víctimas de algún delito, por lo cual se toman decisiones para combatir este problema como son la compra de alarmas, utilización de perros de ataque, uso de teléfonos celulares buscando con ello resolver el problema de forma inmediata.

En la Unidad Habitacional la poca disposición que existe para reunirse con la presidenta de los sectores 3 y 4 ha propiciado una organización que se da solamente por edificios y que ha incluido medidas tales como: la instalación de una puerta de metal en la entrada principal del edificio, así como tomar el acuerdo de mantener esta misma cerrada.

Ahora bien, de las personas que dijeron reunirse para llevar a cabo sesiones entre vecinos y discutir la problemática de la inseguridad, se les cuestionó lo siguiente obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO 7

¿COMO CONSIDERA USTED QUE HAN SIDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ORGANIZACION VECINAL PARA PROVEERSE DE SEGURIDAD?

	NO SE APLICA	MUY MALOS	MALOS	REGULARES	BUENOS
COLONIA	76.7%	0%	3.3%	6.7%	13.3%
UNIDAD	57.5%	2.5%	0%	15.0%	25.0%

NOTA: Los altos porcentajes que aparecen como "NO SE APLICA" en ambas zonas son debido a que en su mayoría no se reúnen para discutir el problema de la inseguridad, no permitiendo con ello organizarse aunque sea de manera temporal por medio de la presidenta de su zona de residencia.

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac.

Como se podrá observar el porcentaje más alto corresponde al calificativo de "BUENOS" tanto en la colonia (13.3%) como en la unidad (25%), de esta manera se demuestra que la gente que trató de organizarse mediante sesiones vecinales, obtuvo resultados buenos debido a que la patrulla que solicitaron hacía sus rondas y que además con la contratación de un sistema de seguridad privada en el caso de la unidad se sentían más seguros, sin embargo, el problema continuaba y estas medidas empezaban a ser insuficientes debido a los constantes delitos que ocurrían tanto en la colonia como en la unidad.

Por otro lado se comprueba que si reúnen, comentan el problema y toman medidas la situación puede mejorar favorablemente.

Otro punto importante a destacar es el hecho de que al momento de realizar nuestra investigación no existía un programa de seguridad pública en la delegación -como ya se mencionó- por tanto el problema de la inseguridad en las zonas estudiadas se incrementaba, quedando claro que los operativos puestos en marcha fueron sólo medidas temporales que no lograron acabar con el problema. Esto se aprecia mejor cuando se cuestionó lo siguiente:

CUADRO 8

¿HA SIDO VICTIMA DE ALGUN ASALTO EN SU COLONIA O UNIDAD?

	SI	NO
COLONIA	43.3%	56.7%
UNIDAD	25%	75%

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac.

En este cuadro se observa que la colonia tiene un porcentaje mayor en tener víctimas de la delincuencia y esto se explica debido a que son atacados de manera constante, a través de robos a casas, robos de automóviles, así como a transeúntes, mientras que en la unidad los delitos son menores y esporádicos, funcionando con ello su sistema de seguridad y las medidas adoptadas por su cuenta (colocación de rejas en ventanas y en puertas principales).

En el caso de la colonia, las medidas adoptadas no son suficientes considerando que su espacio físico es más propicio para el robo (siendo casas unifamiliares), esto quiere decir que los espacios entre calle y calle permiten el fácil acceso a los asaltantes mientras que en la unidad se cuenta con espacios más estrechos y el acceso a los edificios es restringido y por si fuera poco existen en algunos casos rejas al interior de cada pasillo entre departamento y departamento.

Parte de la incultura en torno a la seguridad pública es que no se tiene la costumbre de denunciar los actos delictivos de los que se es víctima, la explicación a ello se debe principalmente a la desconfianza que se tiene para que la justicia pueda ser aplicada, pues implica también, pérdida de tiempo, soborno a las autoridades para agilizar los trámites de investigación y juicio y temor a represalias del delincuente o sus familiares entre otros. Los resultados obtenidos a este respecto los vemos a continuación.

CUADRO 9

¿HA DENUNCIADO USTED ALGUN DELITO DEL QUE HAYA SIDO VÍCTIMA?

	SI	NO
COLONIA	16.7%	83.3%
UNIDAD	15%	85%

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac.

Como se podrá observar, es alto el porcentaje de personas que no denuncia los delitos en ambos lugares, así lo explican los encuestados argumentando que no tienen confianza en las autoridades ni en la aplicación de la ley. Es importante decir que el cúmulo de delitos que no se denuncian quedan excluidos de las cifras oficiales.

Haciendo una comparación entre los datos de ambos lugares, consideramos que el tipo de delitos que se cometen en ambas zonas es

diferente, en ello influye el espacio físico en el que se ubican las viviendas, por un lado los espacios abiertos y de poco tránsito de personas a pie que encontramos en la colonia, por otro lado los lugares comunes y estrechos que tiene la unidad que son de difícil acceso a los cuerpos de seguridad.

Ahora bien, podemos decir que de acuerdo a los datos obtenidos esta hipótesis se corrobora aunque no de manera determinante sino más bien con una ligera diferencia en la opinión de la gente respecto a los delitos que se cometen con más frecuencia, para ello presentamos el siguiente cuadro.

CUADRO 10

TIPOS DE DELITOS MAS COMUNES EN AMBAS ZONAS

TIPO DE DELITO	PORCENTAJE EN COLONIA	PORCENTAJE EN UNIDAD
Transeúntes-Casa Habit.	26.7%	32.5%
Transeúnte-Automóviles	6.7%	15.0%
Transeúntes-Autopartes	10.0%	10.0%
Transeúntes-Homicidios		2.5%
Transeúntes-Violaciones		2.5%
Transeúntes-No contestó	20.0%	10.0%
Casa Habit.-Automóviles	6.7%	5.0%
Casa Habit.-Autopartes	13.3%	10.0%
Casa Habit.-Violaciones		2.5%
Casa Habit.-No contestó	3.3%	
Autos-Autopartes	3.3%	
Autos-No contestó	3.3%	
Autopartes-No contestó		5.0%
No contestaron	6.7%	5.0%

FUENTE: 70 cuestionarios aplicados a la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac.

Con estos datos podemos observar que hay ligeramente mayor incidencia de robo a transeúntes en la unidad y aunque también suceden en la colonia en esta es donde el robo a casas habitación y de automóviles es más frecuente.

Los tipos de delitos que se cometen son similares en ambas zonas, es decir, aquellos en los que más se incide son el robo a transeúntes, el robo a

casas habitación, robo de autopartes y de automóviles, sin embargo se comenten con diferente frecuencia en cada uno de los lugares.

Como señalamos anteriormente dependiendo de la frecuencia y del tipo de delitos que se cometen las medidas que adopta la población para prevenirlos son distintas, estas medidas consideramos que implican un cambio de hábitos en la vida de la gente aunque ellos no consideran las medidas preventivas como un cambio de hábitos argumentando que necesariamente tienen que seguir realizando sus actividades normales como asistir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, salir a comprar lo necesario para el hogar, etcétera.

CONCLUSIONES

El trabajo presentado ha tenido como finalidad abordar diversos aspectos de la seguridad pública que han ido desde la explicación de cómo la seguridad se daba durante el Estado Absolutista únicamente para los gobernantes hasta el surgimiento del Estado moderno, el cual asume el compromiso de brindar seguridad a la sociedad por igual, creando con ello organismos, cuerpos especializados y leyes específicas sobre esta materia.

Se aborda de manera preferente la seguridad pública en México desde los siglos XVIII y XIX y hasta nuestros días, haciendo énfasis de todo aquello que se instrumentó a partir de la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa.

La década de los ochenta viene a ser en México el parteaguas en cuestión de seguridad pública. La crisis económica acontecida, aunque no de manera determinante, influyó en el crecimiento de los índices delictivos, ante esta situación el Estado se ve en la necesidad de buscar soluciones a dicho problema. Para ello elabora un Programa Nacional de Seguridad Pública que propone a su vez la creación de un programa por entidad federativa. Con esto se muestra cómo el Estado mexicano trató de atacar el problema a nivel nacional haciendo responsable a cada entidad en la creación de mecanismos de seguridad para combatir la delincuencia que día a día se manifestaba en ascenso.

Para el caso de la Ciudad de México, las principales medidas que se dieron a este respecto durante el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado fueron entre otras la llamada Renovación Moral de la sociedad, sobre todo de los servidores públicos y con la firme creencia de que con ello se lograría eficientar el servicio de la seguridad, el caso más notable fue el encarcelamiento del ex-jefe de la policía del Distrito Federal, el cual fue acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción y abuso de autoridad, aunque para nuestro juicio dichas medidas fueron más de carácter político que de bienestar para la ciudadanía.

El gobierno de Carlos Salinas hereda en primer lugar una crisis económica, en segundo lugar asume de forma cuestionada la presidencia del país y en tercer lugar continúa el problema de la inseguridad, el cual alcanza el nivel más crítico de toda la historia. Una vez más se reconoce la permanencia de este problema y su agudizamiento, por lo que el Estado se ve obligado de nueva cuenta a intervenir de manera enfática para tratar de solucionar este hecho, es por ello que dentro de las principales acciones que ejecuta este gobierno en dicha materia se encuentra: el Acuerdo por el cual se crean los Comités Delegacionales de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Ley sobre Seguridad Pública y el Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual se creó hasta 1993 buscando con ello alcanzar un real Estado de derecho.

Además es en este sexenio cuando se observa de manera clara una mayor participación ciudadana en la búsqueda de soluciones ante la inseguridad. Por otro lado las autoridades encargadas de la seguridad igualmente enfrentan en este sexenio un creciente índice de corrupción al interior de los organismos policiacos, lo que viene a redundar en que los índices delictivos no desciendan.

Algo importante a destacar es que en este sexenio la violencia y criminalidad sobrepasaron al ciudadano común llegando incluso a afectar a personajes del medio empresarial y del ámbito político teniendo como característica este tipo de delitos la violencia como una forma de manifestación cotidiana. Es decir, se pasó del “robo elegante” al “robo violento” en donde no se respetaba a las personas que se encontraban involucradas en el acto delictivo, ya que aparte de que eran despojadas de sus pertenencias eran sometidas y golpeadas haciéndose por lo tanto uno solo el robo y la violencia.

Por otra parte, durante esta investigación se ha dicho en repetidas ocasiones que si bien es cierto que es el Estado el responsable de brindar seguridad a toda la ciudadanía desde que fue creado en su etapa moderna, no menos cierto ha sido el hecho de que todo esto ha sido mera retórica más que acciones cumplidas, y así lo demuestran los datos presentados sobre índices delictivos.

Finalizado el sexenio de Carlos Salinas le sucedió en la presidencia el Dr. Ernesto Zedillo, el cual de nueva cuenta hereda un país con una multiplicidad de problemas entre los que sigue estando presente la inseguridad pública. Ante esto y desde el momento en que toma el poder asume el compromiso de atacar este problema desde los más altos niveles de organización criminal hasta los menos organizados. Igualmente se enfrenta a una severa crisis económica de la cual se dice es la peor de los últimos 25 años dándose con ello un creciente desempleo el cual viene a asociarse con la delincuencia. En lo que va de esta administración se ha tratado de atacar este problema con diversos operativos ya mencionados, aunque éstos no han contado con el consenso de la población ya que se ha empleado en muchos de ellos la violencia para combatir a esta misma dándose numerosos casos de detenciones arbitrarias a ciudadanos comunes y corrientes mientras la delincuencia actuaba con mas libertad.

Como ya se ha mencionado, la participación vecinal que surge en torno al problema de la inseguridad se manifestó desde las formas más simples - como los enrejados de puertas y ventanas- hasta las formas más sofisticadas - como la instalación de alarmas dentro de los hogares-. Asimismo, otro tipo de participación fue la que se dio a través de la Junta de Vecinos en coordinación con la delegación vía la instrumentación de operativos aunque cabe recalcar que dicha protección era diferenciada dependiendo de los obsequios que se entregaran a los diferentes jefes de sector de la policía.

Para nuestro estudio de caso en la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac, tenemos que el problema de la inseguridad se presentó de manera similar. En un principio se pensó que existía una organización formal que permitía solucionar los delitos que se presentaban en estas zonas ya que eran constantes, sin embargo, lo que se daba en realidad era solamente una participación vecinal informal, la cual incluía operativos creados por los mismos vecinos que funcionaban para autoprotegerse, también como ya ha sido planteado cuando se lograba alguna solución "tal organización" se disolvía no existiendo de forma permanente. Un aspecto que contribuyó a corroborar lo anterior fue el hecho de que casi no existían reuniones para tratar el problema de la inseguridad y tampoco cuestiones de servicios básicos, dejando de lado la posible creación de una organización formal y con mayor duración.

Cabe hacer mención que cuando se inicio esta investigación no existía un Programa de Seguridad Publica para Azcapotzalco -como ya se dijo-, lo cual hacia que la población se encontrara a expensas de los operativos proporcionados por la delegación y los cuales ya se describieron. De estos también se puede decir que no fueron efectivos según lo demostraron nuestras encuestas ya que en su mayoría la gente desconocía dichos operativos pero en cambio se percataba de la multiplicidad de delitos que se sucedían en sus zonas de residencia.

Ahora bien, por lo que respecta a nuestra primera hipótesis debemos dejar bien asentado que ésta sí se cumple, ya que como se afirma “la ineficiencia de los programas de seguridad pública implementados por el Estado han propiciado la inconformidad de la ciudadanía y a que esta busque mecanismos y formas de seguridad que le permitan autoprotegerse”.

De acuerdo con la investigación realizada se pudo comprobar que para la ciudadanía de nuestras zonas de estudio no han sido satisfactorios los programas implementados por el Estado ya que la delincuencia no solamente no se ha logrado disminuir sino que por el contrario ésta ha aumentado hasta alcanzar índices alarmantes. Esto ha propiciado en la ciudadanía un sentimiento de malestar generalizado debido a la impunidad con que operan las bandas de delincuentes las cuales en muchas ocasiones lo hacen solapadas por las mismas autoridades policiacas lo que influye en una creciente desconfianza de la población ante los cuerpos policiacos por considerarlos en su mayor parte corruptos y faltos de ética profesional para cumplir su labor. Esto se ratifica por la encuesta realizada por el periódico *Reforma* el 18 de julio de 1995 en la cual se dice que “la opinión ciudadana no sólo conoce la magnitud del problema, tiene a su vez una clara noción sobre su naturaleza y en lugar de atribuírselo a un sistema jurídico supuestamente deficiente como lo hace el Plan Nacional de Desarrollo sabe que hay poca vigilancia y que cuando la hay es ineficaz a causa de la corrupción que afecta a los cuerpos policiacos”.

En esta misma encuesta se atribuye el problema de la delincuencia en la ciudad a la falta de empleo y al desempleo, dando por asentado el hecho de que a más crisis económica la violencia urbana se incrementa, además de la falta de vigilancia, el incumplimiento de las leyes y la corrupción de la policía.

Así pues al no contar con programas eficientes de seguridad y por si fuera poco con una marcada desconfianza en las autoridades encargadas de impartir justicia la población se ha visto en la necesidad de instrumentar una serie de mecanismos y formas que le permitan autoprotegerse buscando procurarse ellos mismos la protección que debiera darles el Estado y que en la mayor parte de los casos resulta insuficiente y decadente.

Referente a nuestra segunda hipótesis en donde se afirma que “ los mecanismos que la población adopta para defenderse de los delincuentes depende del tipo de asentamiento en que se encuentra y del tipo de delitos que se presentan con mas frecuencia” pudimos darnos cuenta a través de nuestras encuestas que los tipos de delitos que se cometen en ambos lugares son similares, es decir, aquéllos en que más se incide son el robo a transeúntes, robo de automóviles y de autopartes y el robo a casas habitación. Sin embargo estos delitos se cometen con diferente frecuencia en ambos lugares estudiados dependiendo el espacio físico que se ocupa y la facilidad o dificultad de acceso a los lugares, pues en la Unidad se cuenta con espacios más reducidos y de más dificultad de acceso para los cuerpos de seguridad a diferencia de la colonia donde los operativos son de mas fácil implementación debido a los espacios abiertos que existen entre calle y calle.

Podemos decir que a pesar de no existir una organización formal de las personas para combatir la delincuencia, éstas adoptan comportamientos especiales para prevenir ilícitos. Como la incidencia de los delitos es distinta en las dos zonas estudiadas la gente adopta mecanismos y actitudes más a nivel familiar y personal que a nivel colectivo, demostrando esto a su vez la apatía que existe por organizarse y el comportamiento individualizado, sobre todo en la colonia, pues en la Unidad Habitacional existe al menos una mayor comunicación entre los vecinos de un mismo edificio para prevenir algún delito.

Respecto a la participación podemos decir que generalmente ésta no se lleva a cabo en coordinación con el Estado, vía la Delegación política y la Junta de Vecinos, es mas bien que se da una participación vecinal, refiriéndonos con ello a algunas acciones que se llevaron a cabo mediante la coordinación únicamente entre algunos vecinos, como es el caso de poner alarmas, mirillas en las puertas, enrejado de puertas de acceso a edificios o de puertas de los departamentos, así como el enrejado de ventanas.

Podemos afirmar entonces que esta hipótesis se corrobora, ya que la gente sí adopta mecanismos como los mencionados con anterioridad para defenderse de los ilícitos dependiendo del lugar donde viva, sea casa o departamento y tipos de delitos que ocurren.

Para finalizar podemos decir que esta investigación a pesar de ser un estudio de caso nos ha permitido conocer el sentir de la población estudiada, además de que nos hemos podido dar cuenta que el Estado si ha actuado en cuestión de seguridad aunque no con la eficacia que se necesita y se demanda, podemos decir que este tema no se agota con facilidad, pues constantemente surgen nuevas medidas en esta materia.

Consideramos también que el aspecto de la participación ciudadana en cuestión de seguridad pública no ha sido estudiado con amplitud, por lo cual este estudio puede servir de base para estudios posteriores.

ANEXO METODOLOGICO

La presente investigación se lleva a cabo mediante las siguientes consideraciones metodológicas, dentro de las cuales el aspecto referido a las técnicas utilizadas ocupa un lugar importante en el proceso de investigación sobre el tema de Seguridad Pública y la Participación Vecinal en la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuitláhuac.

A continuación se presentan las técnicas utilizadas hasta el momento en el desarrollo de nuestra investigación:

Elección del Tema.

Nuestro tema de investigación surgió de una preocupación conjunta en torno a la serie de acontecimientos generados al inicio del año pasado y durante el desarrollo del mismo en materia de Seguridad Pública, acontecimientos que se vieron reflejados en el descontento ciudadano y en la exigencia de una mayor y mejor seguridad. Teniendo en cuenta lo anterior nos dimos a la tarea de llevar a cabo una investigación documental que nos permitiera ahondar en dicha cuestión. Pudimos entonces constatar que a pesar de no existir abundante información sobre el tema, la relevancia que ha tenido, así como el impacto que ha alcanzado en la organización vecinal en los últimos meses nos motivó a escoger este tema como objeto de estudio de nuestro proyecto terminal. Así pues una vez definido nuestro tema de investigación procedimos a escoger la zonas adecuadas para llevar a cabo un estudio de caso sobre dicha problemática.

Cabe hacer mención de que por sugerencia de la profesora encargada de impartir el Seminario de Tesina se decidió que nuestro universo de investigación fuera la Delegación Azcapotzalco por la ventajas que esta ofrece en aspectos tales como la obtención de información y la facilidad de traslado.

Ahora bien, gracias a la información proporcionada por la H. Junta de Vecinos de la Delegación, decidimos que la zonas más apropiadas para nuestra investigación serían la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad

Habitacional Cuitláhuac por considerar que las mismas nos ofrecían las condiciones necesarias para realizar en ellas un estudio comparativo, ya que estas zonas presentan graves problemas de inseguridad, lo que ha provocado que ahí se tomen medidas para enfrentar dicha situación.

Observación.

Una vez seleccionado el tema de trabajo y ubicadas las zonas a estudiar procedimos a realizar una visita a los lugares seleccionados con la finalidad de tener una visión general y directa de las mismas, ahí pudimos darnos cuenta que:

- El espacio físico que ocupan ambas zonas es diferente ya que mientras en la colonia la gran mayoría de hogares son unifamiliares, la unidad habitacional está constituida por edificios departamentales.
- Que el nivel socioeconómico de los habitantes de dichos lugares es diferente, ya que a simple vista se denota que los hogares de la colonia son de dos pisos, mientras que en la unidad, es un conjunto de edificios que están conformados por departamentos pequeños y sin grandes diferencias espaciales entre unos y otros.
- Que las medidas que toma la gente para autoprotegerse son diferentes.
- Que el espacio físico que ocupa la colonia permite que los habitantes de este lugar tengan sus autos guardados en el garaje de su casa mientras que en la unidad la gente tiene que disponer - para estacionar su coche - de un espacio colectivo en ocasiones alejado de sus departamentos.

Localización de informantes clave.

Una vez hecha la observación directa el siguiente paso fue localizar a los informantes clave de las zonas a estudiar que serían útiles en nuestra investigación; en este caso se contactó a la Presidenta de la Colonia Hogar y Seguridad, la Señora Josefina César y a la presidenta del sector III y IV de la Unidad Habitacional Cuitláhuac, Señora Irma Saravide.

Estas representantes nos informaron de manera general acerca de la situación de inseguridad que prevalece en sus lugares de residencia.

Cabe hacer mención de que el contacto entre dichas representantes y nosotros continúa para seguir desarrollando nuestra investigación.

Trabajo de Gabinete.

Realizada la observación en las zonas seleccionadas y localizados los informantes clave, llevamos a cabo el trabajo de gabinete, el cual consistió básicamente, en plantear los objetivos tanto generales como específicos que pretendemos alcanzar en nuestro trabajo, basándonos para ello tanto en la observación realizada en los lugares a estudiar como en la información recabada referente al tema que nos interesaba. Hecho lo anterior procedimos entonces a plantear las hipótesis que habría de contener nuestra investigación, creyendo que dos serían suficientes y esenciales.

Debemos hacer hincapié en que a la par de estar realizando nuestro trabajo de gabinete seguimos recabando información bibliográfica que nos permitiese seguir ahondando en el tema de nuestra investigación. Dicha información se fue recopilando mediante visitas a lugares tales como: La H. Junta de Vecinos de la Delegación Azcapotzalco con la finalidad de obtener algunas cifras estadísticas sobre delitos en los lugares a estudiar que nos interesaban para tener un panorama más amplio sobre el aspecto de la seguridad en dichas zonas; también realizamos una visita a la Secretaría de Seguridad Pública con la misma finalidad, sin embargo ahí la información no nos fue proporcionada argumentando para ello cuestiones de confidencialidad; asistimos a la Biblioteca México y al archivo General de la Nación con el fin de conocer más información de lo que se ha escrito sobre el tema; asistimos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), ahí pudimos obtener documentos importantes como la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y el Decreto por el cual fueron creados los Comités Delegacionales de Seguridad Pública en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Asistimos también a la oficina de la Comisión de Seguridad Pública de la ARDF y tuvimos la oportunidad de hablar con su vicepresidente, José Espina Von Roehrich, quien nos proporcionó un informe sobre las principales

actividades realizadas por la Primera Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea, encabezada entonces por Amalia García.

Asistimos a una Audiencia Pública sobre Seguridad Pública, en la Delegación Azcapotzalco, a la cual asistió el delegado político, los jefes de sector de la policía preventiva, representantes del ministerio público, y representantes de la Policía Judicial del Distrito Federal, en ella participaron también los representantes de casi todas las Colonias y Unidades Habitacionales de esta delegación. En dicha reunión se expusieron las quejas más sentidas por parte de los vecinos de estos lugares en materia de Seguridad.

Sostuvimos una plática con la Comisión de Seguridad Pública de la H. Junta de Vecinos de la Delegación Azcapotzalco, la cual fue muy instructiva ya que nos aclaró una serie de dudas que teníamos respecto a la seguridad en dicha delegación.

Se logró una plática con las presidentas de la Colonia Hogar y Seguridad, Josefina César y del sector III y IV de la Unidad Habitacional, la señora Irma Saravide, con la finalidad de tener un acercamiento más directo a la problemática de la inseguridad que viven en ambas zonas y a las formas de combatir el problema.

Asistimos a una de las sesiones que se celebraron en la Delegación Azcapotzalco con motivo del mes de la Seguridad Pública a la que asistieron numerosas personalidades

Definición del Instrumento.

El instrumento de investigación para la recopilación de información que utilizamos es aquel denominado como cuestionario. " un cuestionario es por definición un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son objeto de la investigación. Esta operacionalización se realiza mediante la formulación escrita de una serie de preguntas que respondidas por los sujetos de la muestra, permiten estudiar el hecho propuesto en la investigación y verificar hipótesis formuladas" (Ander-Egg, 1991:251)

Tipo de cuestionario.

Una vez definido el concepto de cuestionario, mencionaremos las características más importantes que presenta el instrumento elaborado para nuestra investigación. Podemos decir que nuestro cuestionario es de respuesta indirecta, ya que éste se aplicará a manera de entrevista, además de que se trata de un cuestionario precodificado ya que cuenta con una serie de respuestas preestablecidas y con un lugar reservado para responder.

Tipo de preguntas.

Nuestro instrumento de recopilación de información contiene 18 preguntas en total, de las cuáles 6 son dicotómicas, 4 son de respuesta en abanico abierto ya que cuenta con una alternativa de respuesta libre distinta a las señaladas, 2 son dicotómicas abiertas ya que están complementadas por una pregunta abierta, 5 dicotómicas complementadas con un abanico de opciones y una pregunta de estimación.

Elección de la muestra.

El tipo de muestra utilizado en esta investigación es mixto o combinado, ya que utilizamos tanto el tipo de muestra de áreas o superficie así como el muestreo errático. El primero de ellos es un tipo de muestreo aleatorio probabilístico o al azar ya que se aplica un procedimiento en donde las unidades de muestreo se sustituyen por un conjunto de unidades físicas situadas en un territorio determinado, en este caso no se sortean individuos sino áreas determinadas y se recopila información dentro de las mismas, que a su vez incluyen un submuestreo de familia. Por lo que refiere al segundo tipo de muestra, consiste simplemente en tomar los casos que se tienen a la mano o que se seleccionan arbitrariamente.

Ahora bien, una vez conceptualizadas las muestras procederemos a describir las formas en que estas fueron utilizadas en nuestra investigación.

Tomando en cuenta el muestreo por áreas o superficies se decidió considerar a las casas y departamentos como unidades de muestra y como submuestra a las familias que ahí habitan, específicamente se tomó en cuenta a las personas jefes de familia.

A partir de la observación directa y del cuestionario piloto aplicado en las zonas a estudiar pudimos constatar que son precisamente los jefes de familia los que tienen mayor conocimiento de la problemática de la inseguridad, así como son ellos también quienes han tomado alguna medida para proteger a su familia, de ahí la importancia de considerarlos como sujetos de la muestra.

El segundo tipo de muestra (errático) está dado por las razones ya mencionadas y se determina de la siguiente manera:

En la Colonia Hogar y Seguridad teniendo un total de 38 manzanas distribuidas a lo largo de 19 calles y una Privada, se anotó el nombre de cada una de ellas en un papel y se colocaron en una urna, eligiéndose al azar una por cada cuatro nombres extraídos, es decir, el 25% del total de calles, siendo estas: Frambuesa, Juan Sarabia, Plan de San Luis, Guanábana y Vid. Se decidió aplicar seis cuestionarios en cada una de las calles elegidas por el sorteo, teniendo en cuenta que tales instrumentos de recopilación de datos deberían estar bien distribuidos a lo largo de las calles para evitar respuestas tendenciosas, así pues, en la Colonia Hogar y Seguridad se aplicaron un total de 30 cuestionarios. Debemos hacer mención que sólo se tomó en cuenta una cuarta parte del total de las calles que comprenden la colonia por las razones siguientes: el tipo de estudio que estamos llevando a cabo no es muy extenso, ya que se trata de una investigación de caso y no de una investigación a nivel delegacional, por ejemplo, ya que como es sabido, esto requeriría de una muestra mayor con sus consecuentes limitantes de tiempo, recursos humanos, financiamiento y experiencia.

Por lo que respecta a la Unidad Habitacional Cuitláhuac, ésta se compone de cuatro sectores, divididos administrativamente en 1, 2 y 3 y 4, con un total de 117 edificios. Sin embargo, para efectos de nuestro estudio se consideraron solamente los sectores tres y cuatro, ya que durante una visita a la delegación Azcapotzalco pudimos contactar a la presidenta de dichos sectores, la cual amablemente accedió a brindarnos todas las facilidades que estuviesen a su alcance para recabar información en dichos lugares. Ahora bien, según datos obtenidos en la administración correspondiente a estos sectores(3 y 4), se nos dijo que el número total de edificios en ambos sectores es de 76, con un total de 1760 departamentos, en los cuales se decidió aplicar

50 cuestionarios, sin embargo, dada la similitud de las respuestas, este número se redujo hasta llegar a 40.

Debemos hacer notar que se intentó tener una muestra representativa de la Colonia como de la Unidad a través de lo siguiente:

Los cuestionarios que se hicieron fueron aplicados en diferentes lugares, es decir, para el caso de la Colonia Hogar y Seguridad, se aplicaron en diferentes calles de acuerdo al sorteo realizado y explicado anteriormente con el fin de no tener preferencia por algunas de ellas:

En el caso de los sectores 3 y 4 de la Unidad Habitacional Cuitláhuac, que constan de 76 edificios, con un total de 1760 departamentos, se planeó aplicar 50 encuestas, sin embargo, sólo se llevaron a efecto 40 por los siguientes motivos: primeramente por la dificultad para la aplicación de los mismos debido a que los edificios se encontraban cerrados y nos fué difícil acceder a los departamentos; debido a esta circunstancia, nos vimos en la necesidad de aplicar 2 o 3 encuestas en algunos otros edificios, sin embargo siempre se procuró aplicarlos en las diferentes áreas que comprenden los sectores (cerca de la Avenida Cuitláhuac, en el centro de los sectores y al finalizar la unidad) con el fin de detectar las inquietudes y opiniones de la gente que ahí habita.

Por otro lado, disminuimos el número de cuestionarios a aplicar debido a que apreciamos que las respuestas dadas por la gente eran muy similares, ya que las preguntas eran en su mayoría de carácter general y no individual, por tanto no se aplicaron 10 cuestionarios.

Guía de codificación.

La presente guía de codificación comprende los cambios que se realizaron para poder llevar a cabo la codificación de nuestro instrumento de recopilación de datos. Debemos mencionar que aunque en su mayoría nuestro cuestionario se encontraba precodificado, existían dos preguntas abiertas(7.1 y 15.1) las cuales fueron cerradas tomando en cuenta lo que nos respondió la gente, en base a ello, hicimos un parámetro de acuerdo a la recurrencia y similitud con que nos respondían.

Ahora bien, en algunas de las preguntas, donde se daban ocho opciones, se eliminaron algunas de estas(3.1 y 11.1),tal y como se muestra en la guía de codificación debido a la menor o nula mención de ellos por parte de la gente.

Por lo que respecta a la pregunta número seis que inicialmente tenía nueve opciones, se tomaron en cuenta el total que se habían registrado en dicha pregunta, sin embargo, para efectos de codificación sólo se tomaron en cuenta tres opciones cerrando para su codificación la número 9 referida a "otras", de acuerdo con las respuestas que nos aportaban las personas, dándole el número 10 a esta, para evitar confusiones en la codificación.

En la pregunta número 9.1 en la opción de "si" se tomaron en cuenta las opciones que con mayor frecuencia mencionaba la gente y como lo muestra la guía de codificación, en la opción "no" se tomaron en cuenta las cinco opciones dadas, sin embargo la opción número cinco fué cerrada, pero para efectos de codificación únicamente se tomaron dos opciones.

La pregunta 12.1 que presentaba 7 opciones quedó reducida a cinco, según las respuestas emitidas por la gente, quedando como se muestra en la guía.

La pregunta número 13.2 presentaba 5 opciones, pero quedó reducida a cuatro siguiendo el parámetro antes explicado.

En el caso de la pregunta número 14 la cual contenía 6 opciones sólo se tomaron en cuenta 5, tal como lo muestra la guía, pero para efectos de codificación sólo se consideraron dos opciones.

En las preguntas 17 y 18, las cuales contenían ocho opciones, quedaron reducidas a 6, como se vé en la guía que a continuación se muestra, y para codificar, la pregunta 17 se tomaron en cuenta 3 opciones, mientras que para la pregunta 18 se consideraron sólo dos opciones.

A continuación se dá una relación del número y nombre de las variables consideradas en base a las preguntas hechas en el cuestionario.

VARIABLE	LO QUE PRETENDE MEDIR EN BASE AL CUESTIONARIO
----------	---

- 1) NUMREG Número de Registro
- 2) LUGAR Lugar donde se aplicó el cuestionario
- 3) TEMSP Si ha escuchado hablar del tema de la seguridad pública
- 4) SABEDEL Sabe si la delegación ha actuado para combatir la delincuencia
- 5) SABEROPE Sabe de algún operativo que haya instrumentado la delegación
- 6) CUALOPE Cual operativo conoce
- 7) VICTIMA Ha sido víctima de algún asalto en su lugar de residencia
- 8) DENUDELI Ha denunciado algún delito del que haya sido víctima
- 9) MEDIDAUD Qué medidas ha tomado para prevenir un futuro asalto
- 10) CONFSEG Está conforme con las seguridad que le proporciona la policía
- 11) PORQUE Por qué está conforme o no
- 12) MASELEM Debe incrementarse el número de policías
- 13) MEDGOB Las medidas del Gobierno permiten disminuir los delitos
- 14) PORQUEI Por qué permiten o no disminuir los delitos
- 15) EFIPROG Son eficientes los programas de seguridad pública
- 16) PARTOPE Ha participado en algún operativo
- 17) CUAL En cuál operativo ha participado
- 18) SESIONVE Se llevan a cabo sesiones entre vecinos
- 19) CADACUAN Cada cuando se llevan a cabo las sesiones
- 20) MEDIVÉC Sus vecinos han tomado medidas para procurarse seguridad
- 21) PARTUD Ha participado usted junto con sus vecinos
- 22) NOPART Por qué no ha participado junto con ellos
- 23) FORMORG De qué forma se han organizado sus vecinos
- 24) CAMHABI Ha habido cambios en sus hábitos cotidianos
- 25) QUEFORMA En qué forma han cambiado sus hábitos cotidianos

- 26) RESORGVE Cómo han sido los resultados de la organización vecinal
- 27) MEDSUSVEC Qué medidas han adoptado sus vecinos para protegerse
- 28) DELITOS Cuáles son los delitos más comunes en su zona de residencia

CUESTIONARIO

"SEGURIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN VECINAL"

Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, pertenecientes a la carrera de Sociología Urbana, estamos llevando a cabo nuestro proyecto terminal de tesina, dentro del cual desarrollamos un trabajo de investigación referente al tema de la Seguridad Pública y la Participación Vecinal. Los lugares que hemos seleccionado para la etapa de aplicación de encuestas son la Colonia Hogar y Seguridad y la Unidad Habitacional Cuittláhuac. Esta investigación requiere de una información fidedigna, para lo cual estamos aplicando un cuestionario a una muestra representativa de la población que habita en estos lugares y dentro de la cual lo hemos incluido a usted. Debemos mencionar que los datos aquí obtenidos se manejarán de forma estrictamente confidencial, ya que sólo deseamos que aporten información a nuestra investigación académica.

De antemano por su colaboración, muchas gracias.

FECHA: _____

CUESTIONARIO No. ☐ ☐ ☐

ENCUESTADOR: _____ LUGAR: _____

INSTRUCCIONES: Conteste de manera precisa cada una de las preguntas tachando el recuadro correspondiente a la respuesta elegida o respondiendo de forma clara y veraz sobre la línea que se le indique.

1. ¿Ha escuchado hablar acerca del tema de la Seguridad Pública?

No invadir
esta zona

1. ☐ Sí

2. ☐ No

☐

2. ¿Sabe si la Delegación Azcapotzalco ha actuado en su colonia/unidad para combatir la delincuencia?

1. ☐ Sí

2. ☐ No

☐

3. ¿Tiene conocimiento sobre algún operativo que se haya instrumentado en materia de Seguridad Pública en esta Delegación?

1. ☐ Sí

2. ☐ No

☐

De las siguientes opciones marque aquel operativo que usted conozca

2

1. ☐ Código Águila
2. ☐ Patrulla por Colonia
3. ☐ Policía de Barrio
4. ☐ Operativo Escuelas
5. ☐ Operativo Parques
6. ☐ Operativo Mercados
7. ☐ Operativo Unión
8. ☐ Otro(mencione) _____

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4. ¿Ha sido usted víctima de algún asalto en su colonia/unidad?

1. ☐ Si
2. ☐ No

☐

5. ¿Ha denunciado usted algún delito del que haya sido víctima?

1. ☐ Si
2. ☐ No

☐

6. Indique qué medidas ha tomado usted para prevenir un futuro asalto.

1. ☐ Procuro llegar temprano al hogar
2. ☐ No porto objetos de valor
3. ☐ No porto una gran cantidad de dinero
4. ☐ Procuro no transitar por lugares oscuros
5. ☐ Puse un sistema de alarma en mi hogar
6. ☐ Tengo un perro de ataque en mi hogar
7. ☐ Instalé un sistema de alarma para mi auto
8. ☐ Enrejado de puertas y ventanas
9. ☐ Otras(mencione) _____

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

7. ¿Está conforme con la seguridad que le es proporcionada por la policía de su delegación?

1. ☐ Si
2. ☐ No

☐

¿Por qué? _____

☐

8. ¿Cree usted que debiera incrementarse el número de elementos policiacos en su colonia/unidad para tratar de tener una mayor seguridad?

3

1. ☐ Si

☐

2. ☐ No

9. ¿Considera usted que las medidas adoptadas por el Gobierno han permitido disminuir los indices delictivos?

1. ☐ Si

☐

2. ☐ No

¿POR QUÉ?

SI

NO

1. ☐ Ha disminuido el indice delictivo

1. ☐ No ha disminuido el indice delictivo

☐

2. ☐ Ya no se cometen tantos robos

2. ☐ Se siguen cometiendo robos

☐

3. ☐ La policia cumple con su deber

3. ☐ La policia es corrupta

4. ☐ La policia está más capacitada

4. ☐ Falta de capacitación policiaca

5. ☐ Otro(mencione)

5. ☐ Otro(mencione)

10. ¿Cree usted que sean eficientes los programas de Seguridad Pública implementados por el Gobierno?

1. ☐ Si

☐

2. ☐ No

11. ¿Ha participado activamente en algún operativo de Seguridad Pública implementado por la Delegación?

1. ☐ Si

☐

2. ☐ No

Si ha participado, mencione en cuáles.

1. ☐ Código Águila

☐

2. ☐ Patrulla por Colonia

☐

3. ☐ Policia de Barrio

☐

4. ☐ Operativo Escuelas

☐

5. ☐ Operativo Parques

☐

6. ☐ Operativo Mercados

☐

7. ☐ Operativo Unión

☐

8. ☐ Otro(mencione)

☐

12. ¿En su colonia/unidad se han llevado a cabo sesiones entre vecinos para discutir la problemática de la inseguridad?

4

1. ☐ Sí
2. ☐ No(pase a pregunta 13)
3. ☐ No sabe(pase a pregunta 13)

☐

Si respondió afirmativamente mencione cada cuándo

1. ☐ Cada Semana
2. ☐ Cada 15 Días
3. ☐ Cada Mes
4. ☐ Cada 2 Meses
5. ☐ Más de Dos Meses
6. ☐ No hay Fecha Específica
7. ☐ No sabe

☐

13. ¿En su colonia/unidad los vecinos han tomado medidas para procurarse una mejor seguridad?

1. ☐ Sí
2. ☐ No(pase a pregunta 17)
3. ☐ No sabe(pase a pregunta 17)

☐

¿Ha participado usted junto con ellos?

1. ☐ Sí
2. ☐ No

☐

En caso de que la respuesta sea negativa, mencione por qué no se han organizado.(posteriormente pase a pregunta 17)

1. ☐ Por apatía
2. ☐ Por falta de tiempo
3. ☐ Por falta de comunicación
4. ☐ Se preocupa sólo por su familia
5. ☐ Otro(mencione) _____

☐

14. ¿De qué forma se han organizado para proveerse de seguridad?

1. ☐ Contratamos un servicio de seguridad en la entrada del estacionamiento
2. ☐ Cerramos la puerta de acceso a los edificios
3. ☐ Estamos en contacto con la presidenta para llevar a cabo operativos de vigilancia
4. ☐ No abriendo la puerta a desconocidos
5. ☐ Asistiendo a juntas que se realizan en la delegación
6. ☐ Otra(mencione) _____

☐

15. ¿Considera usted que la forma en que se han organizado para proveerse de seguridad, ha modificado de alguna manera sus hábitos cotidianos?

5

1. ☐ Si

☐

2. ☐ No

¿En qué forma? _____

☐

16. ¿Cómo considera usted que han sido los resultados obtenidos por la organización vecinal para proveerse de seguridad?

1. ☐ Muy Malos

☐

2. ☐ Malos

3. ☐ Regulares

4. ☐ Buenos

5. ☐ Muy Buenos

17. ¿Qué medidas ha adoptado usted o sus vecinos para protegerse?

1. ☐ Sistema de Alarmas

☐

2. ☐ Enrejado de Puertas y Ventanas

☐

3. ☐ Enrejado de Módulos Habitacionales

☐

4. ☐ Enrejado de estacionamientos

☐

5. ☐ Utilización de Perros

☐

6. ☐ Contratación de una empresa de seguridad privada

☐

7. ☐ Ninguno

☐

8. ☐ Otro(mencione) _____

☐

18. De las siguientes opciones marque dos de las formas más frecuentes en que la inseguridad se ha hecho presente en su colonia/unidad.

1. ☐ Robos a Transeúntes

☐

2. ☐ Robos a Casa-habitación

☐

3. ☐ Robos de Automóviles

4. ☐ Robos de Auto-partes

5. ☐ Homicidios

6. ☐ Violaciones

7. ☐ Secuestros

8. ☐ Otro(mencione) _____

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN

OBSERVACIONES: _____

GUÍA DE CODIFICACIÓN

VARIABLE	NUMERO DE OPCIONES	OPCIONES A ELEGIR
1. NUMREG	1. SI 2. NO	1
2. LUGAR	1. Colonia Hogar y Seguridad 2. Unidad Habitacional Cuicláhuac	1
3. TEMSP	1. SI 2. NO	1
4. SABEDEL	1. SI 2. NO	1
5. SABEROPE	1. SI 2. NO	1
6. CUALOPE	1. Código Águila 2. Patrulla por Colonia 3. Policía de Barrio 4. Operativo Escuelas 5. Operativo Unión	3
7. VICTIMA	1. SI 2. NO	1
8. DENUDELI	1. SI 2. NO	1
9. MEDIDAUD	1. Llegar temprano al hogar 2. No portar objetos de valor 3. No portar gran cantidad de dinero 4. No transitar por lugares oscuros 5. puse un sistema de alarma en mi hogar 6. Tengo un perro de ataque en mi hogar 7. Instalar un sistema de alarma para auto 8. Enrejado de puertas y ventanas 10. Cerrar la puerta y/o no abrir a desconocidos	3
10. CONFSEG	1. SI 2. NO	1
11. PORQUE	1. Ineficiencia 2. Corrupción 3. No han sufrido asaltos 4. Los policías sí hacen sus rondas	2
12. MASELEM	1. SI 2. NO	1
13. MEDGOB	1. SI 2. NO	1

14. PORQUE1	SI	1. Ha disminuido el índice delictivo 2. Ya no se cometen tantos robos 3. Otro	2
	NO	1. No disminuye el índice delictivo 2. Se siguen cometiendo robos 3. La policía es corrupta 4. Falta de capacitación 5. Por la crisis y el desempleo	
15. EFIPROG		1. SI 2. NO	1
16. PARTOPE		1. SI 2. NO	1
17. CUAL		1. Código Águila 2. Patrulla por colonia 3. Operativo Escuelas 4. Operativo Parques 5. Operativo Unión	3
18. SESIONVE		1. SI 2. NO 3. NO SABE	1
19. CADACUAN		1. Cada semana 2. Cada mes 3. Cada dos meses 4. No hay fecha específica 5. No sabe	1
20. MEDIVEC		1. SI 2. NO 3. NO SABE	1
21. PARTUD		1. SI 2. NO	1
22. NOPART		1. Por apatía 2. Falta de tiempo 3. Falta de comunicación 4. Otro	1
23. FORMORG		1. Sistema de seguridad a la entrada del estacionamiento 2. Cerrar puertas de acceso a edificios 3. Estar en contacto con la presidenta de colonia 4. No abrir la puerta a desconocidos 5. Otro	2
24. CAMBHABI		1. SI 2. NO	1
25. QUEFORMA		1. Ser más precavido 2. Estar alerta	1

26. RESORGVE	1. Muy malos 2. Malos 3. Regulares 4. Buenos 5. Muy buenos	1
27. MEDSUSVEC	1. Sistema de alarmas 2. Enrejado de puertas y ventanas 3. Utilización de perros 4. Contratación de empresa privada de seguridad 5. Ninguno 6. Otro	3
28. DELITOS	1. Robos a transeúntes 2. Robos a casa-habitación 3. Robos de automóviles 4. Robos de autopartes 5. Homicidios 6. Violaciones	2

NOTA: Cabe señalar que para efectos de computación, se respetaron los número de las opciones elegidas que aquí se presentan, agregando el 0 para el valor NO SE APLICA y el número 9 para el valor NO CONTESTÓ. Ahora bien, el número de opciones a elegir coincide con el número de campos dados, exceptuando la variable MEDIDAUD, en la que se dejaron cuatro campos, pues era probable que eligieran la opción 10 ocupando por ello, un campo más.

BIBLIOGRAFÍA

Ander-Egg, Ezequiel. **Técnicas de Investigación Social**. El Ateneo. México, 1987

Cunill, Nuria. **Participación Ciudadana**. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Venezuela, 1991

De la Madrid, Hurtado Miguel. **Las razones y las obras, Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado**. Crónica de un sexenio: 1982-1988, Presidencia de la República, F.C.E., 1988

González Ruiz, Samuel, Ernesto López Portillo V. y José Arturo Yanez. **Seguridad Publica en México. Problemas, perspectivas y propuestas**. UNAM, México. 1994

Guillén, Raúl y Juan Mora. *Injusticia e indignación moral. Ente estado de derecho y el espíritu de fuente ovejuna*. en: **El Cotidiano** N° 63 Julio-Agosto de 1994:

Heller, Claude. **El Poder, la política y el Estado**. ANUIES. México, 1936

Hernandez, F. Regina (comp.) **La Ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX T.2** Instituto José María Luis Mora. México, 1994\

Hobbes, Thomas. **Leviatan**. F.C.E. México, 1987

Negrete, Silva Melchor y José Javier Gutiérrez Rodríguez. *D.F: (In) seguridad pública y violencia social: algunos datos*. en: **El Cotidiano** N° 63 Julio-Agosto de 1994

Offe, Claus. (comp.) **Contradicciones del Estado de Bienestar**. Alianza-Conaculta. México, 1990

Ortega, Blake J. Arturo. **Diccionario de Planeación y Planificación (un ensayo conceptual)** Edicol, México, 1982

Pratt Fairchild, Henry. **Diccionario de Sociología**. Trad. T. Muñoz, J. Medina y J. Calvo. F.C.E. Mexico, 1984

Sánchez, Mejorada Ma. Cristina. **Seguridad Publica en el D.F. Balance de las acciones**. México, 1995

Sosamontes, Herreramoro Ramón. *El reclamo de la seguridad en: El Cotidiano* N° 54 Mayo 1993

Villavicencio, Judith y Ma. Soledad Cruz. **Guía para la investigación de problemas urbanos**. Departamento de Sociología, U. A. M. Azcapotzalco, 1994.

Weber, Max. **Economía y Sociedad**. F.C.E. México, 1989

Anexo del **Quinto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari**. Sección: D.D.F. 1993

Folleto: **Instalación de los Comités delegacionales de Seguridad Pública**. Lic. Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal. 1989.

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. **Anuario Estadistico 1993**

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. **Anuario Estadistico 1994**

A. R. D. F. **Acuerdo por el que se crean los Comités Delegacionales de Seguridad Pública**. 1989

Ley Orgánica y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 1994

D.D.F. *Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal*. en: **Diario Oficial de la Federación** 27 de Julio de 1993.

Secretaría de Seguridad Pública. *Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 1996-2000*. **Diario Oficial de la Federación**. 11 de marzo de 1996.

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. **Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal**. 19 de Diciembre de 1993.

Departamento del Distrito Federal. **Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal 1993-1994**. Gaceta Oficial del D.D.F. 1993

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. **Guía del Ciudadano**. 1994

Delegación Azcapotzalco. **Programa Delegacional de Seguridad Pública**. 1995

“La Ciudad” en **Reforma** (México, D.F.) Agosto de 1995

Informe de actividades sobresalientes desarrolladas por la Primera Comisión de Seguridad Pública y Participación Civil de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, durante el periodo comprendido entre el mes de Noviembre de 1991 y el mes de Octubre de 1994. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la II Asamblea de Representantes del D. F. Octubre 26 de 1994

Gran Enciclopedia Larousse. T. 7, 8, 10, 12, y 17. Planeta, España, 1988.

Gran Enciclopedia Larousse. T. 5. Planeta, España, 1970.

Gran Enciclopedia Larousse. T. 17. Planeta, España, 1990.

Diccionario Enciclopédico Larousse. T. 17. Planeta, España, 1990.

**Ponencias del Foro sobre la Seguridad Pública en el Distrito Federal
del 7 de Febrero de 1995**

Ing. Salvador López Negrete. (Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México)

Arq. Adriana Valdés Krieg. (Representante de la Organización vecinal de la Delegación Benito Juárez) **El ciudadano y la Seguridad Pública.**

Ing. Francisco Javier de Legarreta Sánchez. (Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México)

Lic. Antonio M. Prida Peón del Valle. (Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C.) **La Seguridad Pública: Tiempos de crisis.**

Lic. Fernando Serrano Migallón. (Abogado General de la UNAM) **El ciudadano y la Seguridad Pública.**